

NUMERO 10

10.^a REUNION — Continuación de la 4.^a SESION ORDINARIA

MAYO 14 DE 1932

Presidencia del señor Vicepresidente de la Nación doctor JULIO A. ROCA

Ministros presentes: del interior, doctor Leopoldo Melo; de relaciones exteriores y culto, doctor Carlos Saavedra Lamas; de hacienda, doctor Alberto Hueyo; de justicia e instrucción pública, doctor Manuel M. de Iriondo; de guerra, coronel Manuel A. Rodríguez; de marina, capitán de navío Pedro S. Casal; de agricultura, doctor Antonio de Tomaso.

Senadores presentes: Arancibia Rodríguez Alberto, Arenas Mario, Bravo Mario, Campos Rudecindo S., Castillo Ramón S., Ceballos Mariano P., Ceballos Reyes Raúl, Eguiguren Atanasio, Galíndez Francisco R., Laurencena Eduardo, López Peña Lucio, Lubary Juan José, Matienzo José Nicolás, Montenegro Pío, Palacios Alfredo L., Patrón Costas Robustiano, Rodríguez Saa Adolfo, Rothe Guillermo, Sánchez Sorondo Matías G., Santamarina Antonio, Serrey Carlos, Vera Cruz, Vidal Juan R., Villafañe Benjamin.

Senador ausente, con licencia: Porto Carlos R.

Senadores ausentes, con aviso: Bruchmann Carlos A., Cantoni Aldo, Correa Francisco E., Torre Lisandro de la, Vera Ocampo Horacio.

SUMARIO

1.—Asuntos entrados:

I.—Peticiones particulares.

2.—Indicación del señor senador Patrón Costas referente a una nota de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, haciendo apreciaciones sobre el impuesto a las transacciones.

3.—Continúa la consideración en particular del despacho de la Comisión Especial de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley, en revisión, sobre ley general de gastos para 1932. Se aprueba con modificaciones.

4.—Cuarto intermedio.

5.—Consideración del despacho de la Comisión Especial de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley, en revisión, creando nuevas tasas im-

positivas o modificando las anteriores o el régimen fiscal. Se aprueba con modificaciones.

6.—Consideración del despacho de la Comisión Especial de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley, en revisión, sobre impuesto a los réditos. Se aprueba con modificaciones.

—En Buenos Aires, a los catorce días del mes de Mayo de 1932, siendo la hora 15 y 25, dice el:

1

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. — Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

mi poder; procuraré satisfacer los informes que deseen cada uno de los señores senadores.

Cumpliendo, señor presidente, con la promesa que hiciera, voy a terminar.

Vivimos horas inciertas y de una extrema gravedad. Nuestra depresión comercial, industrial, ganadera y agrícola, es muy intensa. Todos los hombres que habitan el suelo argentino, — parodiando nuestro preámbulo, — tenemos en este momento un supremo deber que cumplir: cooperar a la reconstrucción económica y financiera del país, poniendo a su servicio nuestros esfuerzos, poniendo a su servicio nuestras energías, nuestro pensamiento y nuestra acción. Más aún, en nuestro carácter de legisladores, debemos considerar la situación general, sin egoísmos, y, por encima de todo interés personal, político, electoral y de cualquier naturaleza, debemos mirar nuestra patria y proceder en esta emergencia con la convicción más profunda de que estas horas son de enorme responsabilidad para el mandato que ejercemos.

Nada más, señor presidente.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el despacho de la Comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Está en consideración, en particular.

Sr. Serrey. — Propongo, señor presidente, que tanto en la ley que ha de tratarse ahora, como en las subsiguientes, los artículos que no se observen se los dé por aprobados, así evitaremos perder mayor tiempo.

—Asentimiento.

Sr. Presidente. — Habiendo asentimiento, así se hará.

—Se votan y aprueban sin observación, en particular, los artículos 1º y 2º del proyecto.

Sr. Presidente. — Queda sancionado.

6

IMPUESTO A LOS REDITOS

—Se lee:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión Especial de Presupuesto y Hacienda ha estudiado el proyecto de ley, en revisión, sobre impuestos de emergencia a los

réditos y por las razones que dará el miembro informante os aconseja su aprobación con las modificaciones siguientes:

Al artículo 9º del Decreto del Poder Ejecutivo que pasa a ser 8º del proyecto, se le agrega al final «Se procederá en las provincias en la misma forma respecto de los impuestos que gravan los inmuebles y en cuanto excedan del seis por mil».

Queda el artículo como sigue: El contribuyente de la Capital Federal y territorios nacionales podrá descontar en cualquier caso, del impuesto a su renta correspondiente a 1932, el importe de la contribución de dos por mil establecida con carácter adicional sobre el valor fiscal de la finca. Se procederá en las provincias en la misma forma respecto de los impuestos que gravan los inmuebles y en cuanto excedan del seis por mil.

En el artículo 34 del Decreto del Poder Ejecutivo se sustituye «10» por «5».

Queda el artículo como sigue: La acción para imponer multas y la acción para hacerlas cumplir una vez impuesta, se prescriben a los cinco años.

Sala de la Comisión, Mayo 10 de 1932.

R. Patrón Costas. — M. Arenas. — C. A. Bruchmann. — R. S. Campos. — M. G. Sánchez Sorondo. — J. R. Vidal.

En disidencia:

M. Bravo.

Sanción de la H. Cámara de Diputados

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º—Modifícase el impuesto de emergencia a los réditos establecido por el Gobierno Provisional el 19 de Enero de 1932, en la siguiente forma:

Artículo 1º — A partir del 1º de Enero de 1932, y por el término de tres años, todos los réditos derivados de fuente argentina, a favor de argentinos o de extranjeros, residentes o no residentes en el territorio de la República, quedan sujetos al gravamen de emergencia nacional que establece la presente ley.

Una ley determinará cómo deberá repartirse a contar del 1º de Enero de 1934 entre la Nación y las provincias, el producido del impuesto. Si a esa fecha no hubiera sido sancionada esa ley, se considerará derogado este impuesto.

Artículo 4º, inciso b) Las ganancias que las sociedades cooperativas distribuyan a sus asociados de acuerdo con el artículo 2º, inciso 17 de la ley número 11 688 y las que se destinen a su fondo de previsión o reserva. Quedan excluidas de esta exención las ventas realizadas a los no socios y a los que siéndolos compran productos a las cooperativas para su reventa;

- e) Las indemnizaciones, participaciones y devoluciones de primas que paguen las compañías de seguros;
- f) Las indemnizaciones que en forma de capital o rentas se paguen por accidentes o por enfermedades profesionales, por lesiones o incapacidad parcial o absoluta para el trabajo, temporal o permanente, y las que perciban los herederos a título de indemnización por la muerte de miembros de su familia.

Art 5º — La renta de los inmuebles rurales queda gravada en la siguiente forma:

- a) Cuando la tierra no fuese trabajada personalmente por su propietario, se pagará un impuesto de 6 % sobre el importe de los arrendamientos devengados anualmente, previa las deducciones del artículo 7º. Se presume que el monto total de los arrendamientos equivale al 5 % de la avaluación fiscal del inmueble, salvo prueba en contrario, y hasta el límite mínimo del 3 %;
- b) Cuando la tierra fuese trabajada personalmente por su propietario y su valuación fiscal excediese de \$ 25 000 mln., se pagará un impuesto de 4 % sobre su renta anual. Con tal propósito se presume que la renta anual equivale al 5 % de la valuación fiscal del inmueble, salvo que el propietario demostrase que la renta no alcanza a la proporción precitada y hasta el límite mínimo del 3 %;
- c) Cuando la tierra fuese trabajada personalmente por su propietario, y su valuación fiscal no excediese de \$ 25 000 mln. queda exenta del gravamen establecido en el inciso b);

Esta exención no se aplicará a más de un inmueble del mismo propietario

Art. 6º — La renta de los inmuebles urbanos queda gravada en la siguiente forma:

- a) Cuando el propietario arrendase su inmueble pagará un impuesto de 6 % sobre el importe de los alquileres devengados anualmente.

Se presume que el monto total de los alquileres equivale al 5 % de la valuación fiscal del inmueble, salvo prueba en contrario por el contribuyente y hasta el límite mínimo del 3 %;

- b) Cuando el propietario habitase su inmueble o lo emplease para el ejercicio de su profesión o negocio, pagará un impuesto de 5 % sobre la renta anual que se presume equivalente al 5 % de la valuación fiscal del inmueble.

En este caso si la valuación no excediese de \$ 25.000 mln., el propietario queda exento de gravamen, pero la exención no se aplicará a más de un inmueble.

Art 7º — Antes de la liquidación del impuesto referido en los artículos 5º y 6º, el contribuyente podrá deducir del monto de la renta los intereses de los gravámenes hipotecarios sobre los inmuebles en cuestión, los impuestos y tasas que recayesen directamente sobre los mismos, y en el caso de edificios o construcciones urbanas además la suma que determinará el fisco entre un mínimo del 5 % y un máximo del 10 % de la renta que presume el fisco para el inmueble, por concepto de gastos de mantenimiento.

Art. 8º — Suprimido.

Ausentismo

Art. 9º (Nuevo). — Los propietarios territoriales, sean personas de existencia ideal o de existencia visible, que no tengan domicilio en la República, pagarán el impuesto de esta categoría (renta territorial) con el recargo del 30 %. Se incluyen en esta situación a los domiciliados en el país que, sin estar al servicio de la Nación, se hallen ausentes durante más de un año.

Art. 10. — Agregar al final del inciso a):

Quedan también excluidos (hasta el 4 y ½ %) los réditos provenientes de las reservas matemáticas de las compañías de seguros, destinados a integrar esas reservas, en cuanto fueran necesarios para constituir el fondo con que hacen frente a las obligaciones contraídas con sus asegurados.

- b) Los comerciantes, Bancos y demás entidades comerciales y civiles, públicas o privadas, quedan obligados a retener el monto de este gravamen en el momento de abonar los intereses devengados por los capitales recibidos a título de préstamo o depósitos a la vista o a plazos.

La misma obligación tienen las entidades civiles o comerciales con respecto a

los intereses devengados por los debentures o bonos emitidos por las mismas. Se excluye de esta disposición los intereses pagados sobre títulos públicos emitidos por los gobiernos nacional, provinciales o municipales, y sobre sus cédulas por el Banco Hipotecario Nacional y por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y se excluye asimismo los intereses de cualquier índole pagados a los Bancos de depósitos y descuentos.

Art. 11. — Los beneficios netos del comercio, la industria y los auxiliares de comercio, quedan sujetos a un impuesto de 5 % sobre el monto de los mismos. A los fines de este artículo se considera como beneficio neto el obtenido durante el ejercicio completo.

El impuesto se aplicará a los ejercicios vencidos con posterioridad al 1º de Enero de 1932, proporcionalmente por los meses que correspondan a este año.

Art. 12, inciso f) (nuevo). — La suma de tres mil seiscientos pesos al año, se declara renta no imponible. Esta reducción no regirá para las personas jurídicas o sociedades civiles o comerciales por acciones, ni cuando el contribuyente, siéndolo también de otra categoría, se hubiera acogido a alguna de las exenciones de los artículos 5º, letra c); 6º, letra b), o 15 de esta ley.

El impuesto de esta categoría se aplicará sobre el 75 % de la renta que exceda de tres mil seiscientos pesos moneda nacional, hasta veinticuatro mil, y sin discriminación sobre el excedente de dicha suma.

Art. 14. — En los comercios o industrias cuyo volumen de venta fuese inferior a \$ 50 000 anuales, se presume que los beneficios netos y el trabajo personal equivalen al 10 % de ese volumen. En tal caso los beneficios netos pagarán el impuesto como si fuesen réditos del trabajo.

Art. 15. — Los réditos del trabajo pagarán un impuesto del 4 % sobre el excedente de la cantidad de trescientos pesos moneda nacional mensuales, que se declara renta mínima no imponible.

Este impuesto se aplicará sobre el 50 % de la renta que excediendo de tres mil seiscientos pesos moneda nacional no pase de doce mil; sobre el 75 % del excedente de esta última suma hasta veinticuatro mil; y sin discriminación sobre el excedente de esta cantidad.

No se descontará de estos réditos la renta mínima no imponible cuando el contribuyente que lo es también de otra categoría ha aceptado alguna de las exenciones de los artículos 5º, letra c); 6º, letra b), o 12, letra f).

Sueldos, salarios, pensiones, jubilaciones y dietas

Art. 16. — Las personas, comerciantes o entidades comerciales o civiles, públicas o privadas, que pagasen a sus empleados, obreros, pensionistas o jubilados, sueldos, salarios, pensiones, jubilaciones, dietas o cualquier otra remuneración de servicios personales, excluidos los descuentos para jubilaciones, quedan obligados a deducir por cuenta del contribuyente el impuesto del artículo anterior, al efectuar el pago de dichas remuneraciones.

Art. 17. — A los fines del artículo 15, se presume que el rédito de los contribuyentes que ejercen una profesión u oficio es de tres veces el alquiler que pagan o que se les computa de acuerdo con el artículo 6º, letra b), por el local de su trabajo y el de su casa habitación, cuando dicho alquiler no exceda de doscientos pesos mensuales, y de cuatro veces cuando el alquiler es superior a esa cantidad, sin perjuicio de la manifestación sobre las entradas reales.

Art. 18. — Toda persona comerciante o entidad comercial o civil, pública o privada, que pague a un profesional liberal una remuneración u honorario no comprendido en el artículo 16, está obligado a descontar, por cuenta del contribuyente, al efectuar el pago, un impuesto del 2 % cuando ese honorario no exceda de un mil pesos moneda nacional; de 3 % cuando excediendo de esta última suma no sea superior a dos mil pesos moneda nacional, y del 4 % cuando se trate de mayor cantidad.

El mismo descuento se hará en las regulaciones judiciales de honorarios en el momento de su pago. Queda derogado el artículo 25 de la ley 11.290.

Este impuesto se deducirá del que deba abonarse de acuerdo con el artículo 15, cualquiera sea el monto del rédito total del contribuyente en esta categoría.

Art. 21. — Toda persona de existencia visible cuyos réditos en su conjunto sobrepasen de pesos 25.000 moneda nacional por año, está sujeta a un gravamen adicional progresivo sobre el monto global de los mismos, además del impuesto que hubiese pagado por cada categoría de rédito de acuerdo con la adjunta tabla.

Art. 21a (nuevo). — A los fines del impuesto adicional se incluirá como renta de las personas naturales las derivadas de dividendos sobre el capital social o de las ganancias netas de toda corporación, sociedad anónima o compañía de seguros, con exclusión de las utilidades exentas de impuestos por el artículo 4º, inciso b), de esta ley. A este efecto, dichas entidades harán y

Mayo 14 de 1932

CAMARA DE SENADORES

10ª Reunión. Cont. de la 4ª Sesión ord.

entregarán a la dirección del impuesto a los réditos las respectivas declaraciones.

Art. 21b (nuevo). — La renta de bienes de personas fallecidas y que se perciba hasta la división de la herencia estará sujeta al impuesto de su respectiva categoría, atribuyéndose a cada heredero en la proporción que le corresponda a los fines del impuesto a su renta global.

Art. 22a (nuevo). — Los contribuyentes casados tienen derecho a la reducción de un 10 por ciento de su renta imponible por categoría y de un 5 % por cada hijo a su cargo que, careciendo de réditos propios, sea menor de veinte años o esté físicamente incapacitado para el trabajo, o ascendiente, sin rentas o incapacitado, que esté a su cuidado, o persona que perciba alimentos de conformidad con las disposiciones del Código Civil, hasta un máximo del 30 %. Esta reducción no se aplicará al impuesto global ni sobre el excedente de diez mil pesos de cada categoría de renta.

Artículo 28. — Los representantes legales de las personas de existencia ideal en el caso de omisiones o hechos que importen infracción o defraudación a las disposiciones de este impuesto, obligan a sus representados, los que son responsables por las sanciones que corresponda.

Artículo 33. — Los pagos de impuestos o multas que no se efectúen en debido tiempo, devengarán el interés de 1 y $\frac{1}{2}$ por ciento mensual, sin necesidad de interpelación administrativa ni judicial.

Artículo 35. — Los denunciante tienen derecho al 25 % de la multa que ingrese al fisco, siempre que presenten los elementos necesarios para comprobar el hecho denunciado. No tendrán intervención alguna en el sumario, ni acceso a las informaciones del contribuyente. El denunciante deberá prestar fianza a satisfacción de la Dirección de Impuestos, la que perderá a beneficio del Consejo Nacional de Educación si resulta infundada la denuncia.

Artículo 37a. — (nuevo) La Dirección del Impuesto a los Réditos podrá designar a contribuyentes para asesorar o formar parte de las comisiones encargadas de censar a los contribuyentes, proceder a las tasaciones de oficio y demás funciones semejantes, revistiendo estas misiones el carácter de carga pública.

Estas designaciones deberán recaer siempre en personas residentes en el lugar donde deben desempeñar sus funciones, sin que pueda obligárselas a efectuar viajes o cambios de domicilios por razón del desempeño de las mismas; y son renunciables únicamente por causa justificada.

Artículo 37b. — (nuevo) Para aplicar el impuesto que crea esta ley en lo referente a la propiedad urbana y rural, se tomarán en cuenta los registros de contribución directa rural y urbana que estén en vigencia en las provincias.

Art. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente. — Está en discusión, en general.

Sr. Vidal. — Pido la palabra.

Al iniciarse la discusión en general del plan financiero en las sesiones anteriores, ya se hicieron oír opiniones contrarias a este proyecto, y no es de extrañar, señor presidente, porque este impuesto a la renta ha suscitado en sus comienzos, en todos los países que actualmente lo tienen establecido, grandes resistencias y tenido en su principio una vida intermitente, para terminar después de sucesivas reformas por adoptarlo en forma definitiva. Se han aducido en contra a este impuesto, consideraciones de orden constitucional, político y económico por el señor senador por Salta, por el señor senador por Entre Ríos, cuyas opiniones comparto en gran parte, aun cuando no llegue a las mismas conclusiones, y por el señor senador por la Capital, cuya opinión he escuchado con alguna extrañeza, por tratarse, señor presidente, de un impuesto que puede decirse socialista.

Este impuesto tiene no sólo una función fiscal, sino también una función social, atenúa los efectos de los impuestos al consumo y alcanza a recursos que actualmente están exentos de este gravamen, sin ningún fundamento que pueda justificarlo. Y es más de extrañar la opinión del señor senador por la Capital, cuanto que este impuesto a los réditos, ha sido en términos muy parecidos proyectado por el sector socialista de la Cámara de Diputados.

Tanto en el proyecto sancionado por la Cámara de Diputados, como en el proyecto socialista, se encuentra la misma estructura, como el mismo sistema de combinar la forma cédular y global, que son las dos formas clásicas en que se ha establecido en los distintos países.

Los gravámenes establecidos para las distintas categorías de las cédulas, son los mismos en la sanción de la Cámara de Diputados que en el proyecto del Partido Socialista. Se dividen en cuatro cédulas y gravan la renta de la tierra, los réditos mobiliarios, los de la industria y comercio y los del trabajo.

Yo no he alcanzado a interpretar en qué se fundan las objeciones que el señor senador por la Capital ha formulado respecto a estos distintos gravámenes a la tierra, al comercio y la

industria y al trabajo porque no hay una diferencia sensible entre uno y otro proyecto.

Las observaciones formuladas por el señor senador por Salta, de que es un impuesto poco adaptable a nuestro medio, trasplantado de países en condiciones distintas al nuestro, que aleja a los capitales, y por lo tanto constituye un inconveniente para un país que necesita atraerlos, como el nuestro, son indudablemente atendibles, pero la fuerza de la objeción pierde en gran parte su valor al tener en cuenta la moderación con que este proyecto establece esos gravámenes.

Los capitales, señor presidente, temen más al monto del gravamen que a la calidad del gravamen. Un gravamen elevado en las transacciones y las herencias, o en cualquiera de los otros tributos, alejaría más los capitales que un impuesto moderado a la renta como el que se establece en este proyecto.

La otra objeción tiene más importancia; es la relativa al carácter temporario del impuesto.

Indudablemente, para que este impuesto pueda producir efecto, para que pueda reemplazar con ventaja a otros impuestos, cuando mañana se haga la ordenación definitiva del sistema rentístico del país, requiere que tenga un carácter permanente; pero hay una valla insalvable en la disposición constitucional, que no autoriza al Congreso a imponer contribuciones directas, sino con carácter temporario y en determinadas y especiales circunstancias.

La ley, para ajustarse a esta disposición constitucional, ha fijado el término de 3 años y ha establecido, en su segunda parte, que el producido de este impuesto desde el 1º de Enero de 1934, debe ser repartido entre las provincias y la Nación.

Este impuesto, señor presidente, pertenece más a las provincias que a la Nación.

En todos los países de instituciones análogas a la nuestra, los impuestos indirectos se han considerado que son los que forman el tesoro nacional y los directos los que forman la renta de los Estados. Así lo tenía establecido la República Norteamericana. En Suiza, los cantones tienen el impuesto directo y la federación el impuesto indirecto. En Alemania, tenían también afectada esta distribución de renta, pero, últimamente, esto ha sido modificado, y el impuesto a la renta ha venido a constituir uno de los impuestos principales en todos estos países más adelantados, llegándose en Estados Unidos hasta la reforma de la Constitución, para poder establecerlo con carácter definitivo.

El mecanismo del proyecto, señor presidente, trata de salvar todas las dificultades que

en la práctica de otros países se han presentado para la aplicación de este impuesto. Establece, como he dicho, un gravamen mínimo del 6 por ciento para la tierra y para los réditos de capitales mobiliarios, del 5 por ciento para los réditos del comercio y la industria y del 4 por ciento para los réditos de trabajo. Establece el principio de la discriminación en las dos formas, general e individual. Reduce el gravamen a la tierra cultivada por los mismos propietarios, fija una renta mínima y gradúa la tasa del gravamen con arreglo a esta renta, graduándola de dos, tres y cuatro por ciento en los réditos del trabajo.

En cuanto a la percepción de este impuesto, crea un organismo que se encarga de la aplicación y recaudación del impuesto, un tribunal administrativo que ofrece todas las garantías al contribuyente, para decidir las reclamaciones que puedan hacerse de las resoluciones de la dirección. Este tribunal estará compuesto de miembros con carácter de inamovilidad y nombrados con acuerdo del Senado. Se crea asimismo una comisión de contribuyentes para atender las consultas y reclamaciones que puedan suscitarse en su aplicación.

Como he dicho, señor presidente, las observaciones formuladas por el señor senador por Entre Ríos, son, en mi concepto, las que revisten mayor importancia y gravedad. Este impuesto lastima los intereses económicos de las provincias, ya bastante gravados por otros impuestos existentes. En otras circunstancias distintas de las actuales, esto podía haber determinado mi voto en contra, pero en las actuales, señor presidente, ante las necesidades que no pueden encontrar en otra forma solución, yo creo que las provincias estarán, como han estado siempre, dispuestas a hacer cualquier sacrificio para salvar los prestigios y el crédito de la Nación.

Creo, señor presidente, que podemos repetir las palabras del señor presidente de la Cámara de Diputados de Estados Unidos al considerar los proyectos de aumento de impuestos y creación de nuevos impuestos, que ha sido necesario establecer también. Decía, entonces, el presidente de la Comisión, que había sido opositor al impuesto a las transacciones, pero que en las circunstancias en que se encontraba el país era partidario de los impuestos más onerosos. Es nuestro principal deber crear impuestos suficientes para mantener el crédito del país.

Podemos repetir nosotros, señor presidente, las mismas palabras y decir en las circunstan-

cias actuales que nuestro primer deber es salvar el crédito del país. Represento a una de las provincias más celosas de su autonomía, una de las pocas que pudo defenderse con éxito de las imposiciones del poder federal, pero a la vez que un sentimiento autonomista arraigado, esa provincia tiene un sentimiento nacionalista indestructible, que la ha llevado siempre a contribuir hasta con su sacrificio cuando así lo ha requerido el interés de la Nación. Por eso, señor presidente, he subscrito este despacho y creo que la Cámara lo aprobará, poniendo por sobre todo, los superiores intereses de la Nación.

Nada más.

Sr. Eguiguren. — Pido la palabra.

Sr. Galíndez. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Eguiguren. — Nos encontramos, señor presidente, frente al proyecto de recursos en mi concepto de mayor trascendencia, que tendrá repercusiones insospechadas

Aparece vestido este proyecto por un ropaje simpático, como un impuesto que constituye una innovación plausible dentro de nuestro sistema tributario, como un gran adelanto. Se trae a colación el recuerdo de este impuesto en otras naciones, pero en realidad, si se analizan a fondo los detalles del mismo, se ve que en verdad no tiene de impuesto moderno y científico más que el ropaje; detrás no están sino nuestros vetustos, antieconómicos y anticientíficos impuestos tradicionales.

En realidad le falta a este impuesto el fundamento y la base que debe tener todo tributo, y puedo sintetizar en tres aspectos todo lo malo que él contiene.

Es en primer lugar anticientífico, es en segundo lugar, y esta es la consecuencia más trascendental que en mi concepto tiene, el elemento corruptor de las autonomías provinciales; y, finalmente, es violatorio de la Constitución.

Que el impuesto titulado de réditos es antieconómico y anticientífico, fácil es demostrarlo conforme se estudie un poco el contenido del proyecto.

Con dos o tres ejemplos bastará para poner de manifiesto o probar, mejor dicho, la afirmación que dejo enunciada.

Tomo, por ejemplo, el caso de los propietarios de fincas urbanas y nos encontramos con este concepto curioso: en vez de innovar con este sistema de impuesto a los réditos, que se dice tiene un contenido social, es en realidad la repetición del impuesto de contribución directa que tienen las provincias, la Capital Federal

y los territorios nacionales, y en vez de gravar la tierra libre de mejoras, que proporciona a su dueño un beneficio que se lo da la colectividad con el acrecentamiento general de sus mejoras, se grava el progreso, se persigue al hombre que traduce su esfuerzo en algo útil para la sociedad, al aumentar, por ejemplo, la edificación, embelleciendo las ciudades, proporcionando trabajo y dando oportunidad a que todos sus habitantes puedan encontrar viviendas en las condiciones higiénicas a que tienen derecho.

Así, nos encontramos que cuando los propietarios tratan de mejorar sus inmuebles edificando, va el fisco con el sistema tradicional y lo persigue cobrándole más. En cambio, el vecino de al lado, que cauta y prudentemente especula con el esfuerzo ajeno y que lo espera todo del progreso de los demás, conserva baldío su terreno y de acuerdo a este *científico, moderno y socialista* impuesto, resulta beneficiado, paga menos. De modo que este impuesto es una persecución, una traba al progreso.

Creo que los ejemplos aclaran mejor que todas las palabras las situaciones que pueden plantearse. Citaré un caso de mi provincia, de donde puedo hablar con conocimiento exacto.

Tomo a un propietario que tiene tres fincas urbanas en la ciudad de Paraná: una de 40 000 pesos y dos de 25 000 pesos. Ese propietario actualmente paga, más o menos, por contribución directa, 440 pesos al año; por servicios municipales, 450 pesos al año, y de obras sanitarias, también al año, 460 pesos. En total, está pagando por impuestos 1.350 pesos al año, y la renta de sus propiedades es la siguiente: las propiedades de 25 000 pesos están redeviando al año 1.200 pesos, y la de 40.000 pesos; 2.400 al año; en total, 4.800 pesos anuales. Paga 1.350 pesos de impuestos provinciales.

Viene la Nación con este «modernísimo y científico» impuesto y entonces, aplicando el mecanismo de la ley, tenemos lo siguiente: de los 4.800 pesos de renta debemos sustraerle la renta no imposible, es decir, 3.600 pesos y se aplica entonces el 75 por ciento el impuesto sobre 1.200 pesos, 900 pesos. Le aplican la escala del 6 % y tenemos entonces como impuesto nacional 54 pesos. En total, ese propietario de tres casas va a pagar 1.424 pesos sobre una renta de 4 800 pesos. Quiere decir que líquidamente le queda para vivir, para mantenerse, para desenvolverse, 3.396 pesos al año, vale decir, 283 pesos al mes con un capital de 90.000 pesos.

¿Saben los señores senadores cuánto representa ese impuesto? Es el 40 % de la renta

Ahora bien; si este propietario, en esas condiciones, que ha traducido su esfuerzo para construir esas viviendas, llega a esta situación que no es nada envidiable y resuelve liquidar sus propiedades y dedicarse al comercio, estableciendo una casa de comercio de ramos generales con 90.000 pesos, aparece entonces el gobierno nacional con el impuesto a las transacciones.

Tomemos a ese propietario con sus 90 000 pesos de capital. Pone una casa de ramos generales. Calculemos, lo calculo exiguamente, su volumen de venta en 150.000 pesos al año. Inmediatamente vienen por estas leyes que hemos sancionado, las patentes, y si este propietario vive en la Capital Federal, paga por lo menos 1.600 pesos de patente. Va a pagar por el impuesto a la renta 450 pesos y otros 450 pesos por el impuesto a las transacciones; en total, 2.500 pesos. Ahora, calculando que las ganancias sobre ese volumen de ventas le representen el 10 %, vale decir, 15.000 pesos, y calculando lo menos que se puede calcular en gastos de su negocio, alquiler, dependientes, etcétera, 6.000 pesos, tenemos por un lado, gastos generales, 6.000 pesos, y por otro lado 2.500 de impuestos; total, 8.500 pesos. Le quedan de ganancia líquida 6.500 pesos. Es decir, que siempre aparece el Estado persiguiéndole por todas las actividades útiles, socialmente productivas.

Pero en cambio, de acuerdo a esta «científica y moderna» ley, si este señor, acosado en todas sus actividades útiles, resuelve convertirse en un buen rentista, sentarse en su casa tranquilamente e invertir esos 90.000 pesos en fondos públicos, tomo el caso al 6 %, llega a la zona feliz y tranquila, allí no paga impuestos ya porque esta ley le exime de ellos y entonces tenemos a este hombre que tranquilamente está ganando una renta líquida de 5.400 pesos al año. De manera que este instrumento de adquisición de origen socialista, según dicen algunos, resulta que persigue al hombre en todas sus actividades útiles, en todas sus actividades socialmente productivas y únicamente lo deja en paz cuando hace la vida tranquila del buen rentista.

Yo digo: una ley, señores senadores, debe ser no solamente un instrumento fiscal; debe tener un fundamento de justicia y debe también tener una finalidad de perfeccionamiento para castigar a aquellos capitales improductivos, pero tratando de estimular siempre al trabajo y a todas las actividades socialmente útiles.

En cambio, esta ley los persigue y va a convertir a todos los argentinos, casi diría, en unos usureros.

Fijense los señores senadores, si consideramos a esta ley en otro aspecto, que nos encontraríamos con esta situación curiosa: los que se dediquen, por ejemplo, a hacer hipotecas, no han de pagar en realidad nada, así como los que hagan inversiones al 10, 12 ó 13 por ciento. Es cierto que la ley condena y grava esos intereses, pero en la práctica esos usureros no van a pagar nada, por una razón sencilla, porque se lo van a sacar al deudor necesitado que va a reclamarles sus servicios en el momento de hacerle el préstamo o sencillamente lo va a disimular con un aumento de intereses. En definitiva, este impuesto científico y moderno va a recargar siempre al hombre necesitado que se ve en la extrema obligación de ir a pedir dinero en esas condiciones gravosas.

Vayamos más allá: tomemos ahora los profesionales, a los cuales se refirió el señor senador por Tucumán el otro día en una forma muy gráfica. La ley presume una renta global triple del valor del alquiler que pagan y en realidad, sabemos perfectamente que los profesionales, sobre todo los que se inician, tienen la necesidad de colocarse en una situación aparentemente buena para poder trabajar, para poder impresionar, si se quiere, a sus clientes. Tienen que pagar locación por su estudio y por su casa y no solamente tienen el gasto de alquileres, sino otra cantidad de gastos. De manera que el impuesto no es a la renta, a la ganancia, diríamos, líquida, sino un impuesto al trabajo, un impuesto a la necesidad, al capital que produce, y que únicamente libera al capital que se dedica pura y exclusivamente a sacar el producto de sus rentas, sin ningún trabajo y sin esfuerzo.

Me parece, y no quiero molestar a la Honorable Cámara mayormente, que bastan estas observaciones puestas así de manifiesto, al desnudo, para evidenciar lo que dije al principio, que es un impuesto antieconómico y anticientífico, que es un impuesto retrógrado, que en vez de estimular las fuerzas sanas, las tratará de matar y las matará.

Ahora voy a considerar el otro aspecto: he dicho que es corruptor de las autonomías provinciales.

Desgraciadamente nosotros los argentinos tenemos una cualidad bien señalada, bien visible: olvidamos el pasado con una facilidad ex-

Mayo 14 de 1932

CAMARA DE SENADORES

10ª Reunión. Cont. de la 4ª Sesión ord.

traordinaria. Hemos vivido largos años bajo la acción de un gobierno centralista y absorbente, de un gobierno que hizo tabla rasa con las autonomías provinciales. Han sufrido todas las provincias en carne propia esos procedimientos lesivos de sus autonomías; mientras sufrieron esos inconvenientes todos los partidos políticos que se inspiraban en los sanos intereses proclamaron bien alto que era necesario defender, resguardar, con instrumentos legales y hasta constitucionales, la autonomía de las provincias.

Ya ha pasado el gobierno centralista. Estamos viviendo en estos momentos bajo un gobierno que ha jurado respetar la Constitución, que la está respetando en forma visible todos los días; y entonces ya nos consideramos curados, ya podemos vivir tranquilos; adiós los temores de lesionar las autonomías provinciales.

Señores senadores, no olvidemos que los gobiernos pasan, que los hombres son transitorios en las posiciones públicas y que los inconvenientes que ayer notábamos y que ya no existen, pueden reproducirse mañana y entonces curémosnos anticipadamente, no espere-mos el momento del peligro para salir a gritar nuevamente nuestras penas y nuestra rebeldía.

Considero que los elementos esenciales para afianzar la autonomía política de las provincias no son solamente las normas institucionales y legales. Tienen un fundamento económico evidente: no hay nada más corruptor que la pobreza, tanto en el orden individual como en el institucional y público. Las virtudes más prístinas a veces caen bajo esa situación: y las provincias se convierten en mendigas del gobierno central por la pobreza en que a veces ese mismo gobierno central las coloca sacándoles parte de sus rentas.

Nuestro gobierno, de acuerdo a la Constitución, es federal, pero hay una tendencia unitarista evidente del gobierno central. El gobierno central se ha penetrado en las provincias con infinidad de instituciones. Ha ido a las provincias con las obras sanitarias, con los puentes, con los caminos, con los colegios nacionales, hasta con las instituciones que, por disposición expresa de la Constitución nacional en su artículo 5º, son de exclusiva incumbencia, digo mal, que constituyen un deber imperioso para las provincias: sostener la instrucción primaria; no obstante, el gobierno central ha ido con las Escuelas Láinez, y ha llegado hasta las propias ciudades, no a las campañas, con estas escuelas. La acción del

gobierno federal, en las provincias, es de una corrupción extraordinaria, desquicia la situación de las mismas, y véase lo que sucede con la ley Láinez, por ejemplo, en Entre Ríos, a pesar de que la provincia ha resistido en todo lo que ha podido, que se difunda esta clase de escuelas, tratando ella de cumplir sola con los deberes que la Constitución le impone.

Los maestros provinciales ganan, más o menos, 130 pesos y los maestros nacionales ganan de 220 a 250 pesos. Hay casos en que las escuelas provinciales y las nacionales están cerca unas de las otras y los maestros provinciales viven permanentemente con los ojos puestos en las escuelas nacionales, para poder ubicarse y la diferencia enorme de sueldo altera y perturba la permanente tranquilidad espiritual que debiera tener el maestro.

Y lo mismo sucede con las obras públicas. Allí va la Nación con su sueldo mínimo, que en la provincia de Entre Ríos no existe, y resulta que se desmoralizan los trabajadores, porque algunos de ellos que trabajan menos, como pertenecen a la Nación, ganan más que los que pertenecen a la provincia y resulta que eso encarece enormemente las obras, porque los jornales tienen que aumentarse.

Recuerdo — me parece que fué bajo el gobierno del doctor Laurencena — que se hacían gestiones para que se diera a la provincia la realización de un camino de Tala a Uruguay, porque la provincia puede hacerlo en condiciones mejores y más baratas que la Nación. Ahora se dirá: ¿pero por qué las provincias reclaman estas obras de carácter nacional? Las obras, sí, las reclaman, pero no en carácter de dádiva, como lo puntualizó mi colega de Entre Ríos; las reclaman porque la Nación ha penetrado a quitarles rentas propias con los impuestos internos, entonces las provincias reclaman la parte de lo que ellas entregan a la Nación.

Ahora es necesario no fomentar esa tendencia y para llegar a la solución justa y equitativa y constitucional, habría necesidad de darle a las provincias las rentas que la Nación le quita y entonces las provincias no reclamarían un solo centavo del gobierno central y tendríamos así una verdadera autonomía política y económica de todos los Estados. La Nación no sufriría absolutamente nada, porque no deben asustar esos celos autonómicos de las provincias, como no nos asusta a nosotros en Entre Ríos, el fenómeno típico del localismo excesivo de nuestros departamentos. Cada departamento en Entre Ríos se considera una

pequeña provincia, y el hijo de Concordia siente un orgullo propio, típico, característico, quiere ser de Concordia, no quiere ser de Gualaguaychú, como el de Gualaguaychú no quiere ser de Uruguay, porque se considera superior; de esa emulación que no es disgregante resulta que cada departamento trata de superar a otro y entonces, en conjunto, resulta beneficiada la totalidad de la provincia y el engrandecimiento colectivo de la misma.

Lo mismo sucedería con la Nación; si las provincias se engrandecen, se habría engrandecido el organismo total, que es la Nación.

No hay discordancia entre los intereses provinciales y los intereses nacionales, señores senadores; nosotros no venimos aquí a levantar banderías separatistas; creemos que del afianzamiento autonómico de las provincias resultará beneficiada la Nación.

En cambio con estos impuestos a los réditos van a desquiciar las finanzas de la provincia.

Las provincias se debaten, señor presidente, actualmente en la miseria, encontrándose con verdaderas dificultades para cobrar los impuestos de contribución directa y en la nuestra, que no es de los pobres, nos hemos encontrado con este fenómeno curioso: propietarios de extensiones más o menos importantes que siempre pagaban con toda puntualidad, ahora las han pagado simplemente por un solo cuatrimestre y las han pagado por un cuatrimestre porque no han podido pagar la totalidad del año.

Sabemos con exactitud que los agricultores no ganan lo necesario para pagar y costear los gastos de la siembra y de la cosecha; sabemos que los ganaderos no pueden colocar sus carnes en condiciones ventajosas y por esas razones se ha designado en Entre Ríos una comisión de conciliación entre propietarios y colonos, así se ha conseguido la rebaja de los arrendamientos. Ahora va el gobierno central a aumentar esos impuestos directos. La consecuencia será que los propietarios tendrán que aumentar su arrendamiento; las víctimas serán los colonos, es decir, la clase trabajadora rural, la parte más sana de nuestra población, conjunto en el cual se generan todas las virtudes, y por cuyo esfuerzo se han neutralizado los errores de los partidos políticos gobernantes; clase a la cual debemos cuidar especialmente y a la que ahora vamos a hundir más.

Yo le decía al señor ministro de agricultura en una conversación privada, que es realmente angustiosa la situación de los agricultores del

país, pues los productos no compensan los gastos de siembra; y es hasta tal punto desesperante, que muchos colonos han resuelto no seguir sembrando, porque se han dado cuenta de que cuanto más siembran más deben, y han solucionado la situación abandonando sus tierras para ambular por todas partes, buscando en qué ocuparse.

Le decía al señor ministro de agricultura cómo es de complejo este problema y cómo urge resolverlo. Yo lo he estudiado y lo sigo estudiando con honda preocupación, y le decía al señor ministro de agricultura, que si encontrara la forma de resolverlo, siquiera sea en parte, habría hecho un gran ministerio.

Esa es la situación en que están todos los agricultores y ganaderos del país, esa es la situación en que están todos los trabajadores, industriales y comerciantes. ¿Cómo es posible, entonces, que vaya el gobierno de la Nación a agravar esa angustia con este impuesto a la renta, que apenas podrá sacarle el pan que aún conservan, señores senadores?

La consecuencia será el empobrecimiento de las provincias y el desquiciamiento de sus rentas, y entonces tendrán que venir a mendigar al gobierno central que los vaya substituyendo en el cumplimiento de sus servicios. Esa será la consecuencia fatal de la aplicación de este impuesto.

Voy a considerar el tercer aspecto, señor presidente. Dije y trataré de probarlo, que este impuesto viola flagrantemente la Constitución nacional, que establece en su artículo 4º, cuáles son las fuentes de recursos del tesoro nacional.

Allí se fijan, como rentas propias, los derechos de importación y exportación, la venta o locación de tierras de propiedad nacional, la renta de correos y las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso general, y de los empréstitos y demás operaciones de crédito que decreta el mismo Congreso para urgencia de la Nación o para empresas de utilidad nacional.

Las contribuciones a que se refiere el artículo 4º, se consignan en el artículo 67, inciso 2º, donde se faculta al Congreso para imponer contribuciones directas por tiempo determinado y proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la «defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exija.»

De manera que, para establecer estos impuestos directos, deben concurrir estas tres condiciones: necesidad de la defensa, la seguridad común y el bien general del Estado.

Mayo 14 de 1932

CAMARA DE SENADORES

10ª Reunión. Cont. de la 4ª Sesión ord.

No es necesario ahondar mucho para darse perfectamente cuenta de que en estas circunstancias no concurren estos tres elementos. ¿Acaso el Estado cuando lo proyectó y estudió, ha recurrido a todos los elementos de salvación para que tenga necesidad de recurrir a las provincias? No, señor presidente.

Se dirá que el Congreso es soberano en la apreciación de la concurrencia de estas condiciones, estoy de acuerdo; pero de allí, de esa soberanía que tiene para la interpretación, no se puede llegar a la arbitrariedad. Lo mismo que el juez que tiene la facultad de interpretar y aplicar la ley, no puede llegar en esa potestad interpretativa a la violación de la propia ley.

Lo mismo el Congreso; no puede, basado en su potestad, legislar y llegar a falsear las bases que la misma Constitución consagra. Pero hay más, la forma todavía en que está redactada esta disposición es la consagración flagrante de la violación de este artículo 67, inciso 2º de la Constitución. Dice en su segunda parte el despacho de la Comisión y el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados: «Una ley determinará cómo deberá repartirse, a contar desde el 1º de Enero de 1934, entre la Nación y las provincias, el producido del impuesto Si a esa fecha no hubiera sido sancionada esta ley, se considerará derogado este impuesto». Quiere decir que este primer artículo consagra en realidad la violación de la Constitución.

El artículo 67, inciso 2º, al facultar, llenadas las condiciones que él mismo prescribe, el establecimiento de este impuesto, lo dice categóricamente: deber ser en manera temporaria, y en la forma cómo está despachado lo consagra, en principio, en forma definitiva, es decir, establece que fijando una repartición con las provincias, éste impuesto será siempre impuesto nacional, contra lo que la Constitución prescribe.

Creo que no debemos olvidar los frutos de la experiencia, ni olvidar tampoco lo pasado y que debemos defender en todos los terrenos las autonomías de las provincias. Por eso, no concibo que ningún representante de ellas pueda aceptar esta última parte del artículo. Por lo que respecta a la provincia que representamos, no titubeo en decir que, interpretando los anhelos de la misma, desde ya renuncia a todas las participaciones para salvar sus principios de autonomía provincial, y renunciemos a cualquier compensación de carácter pecuniario, al hacer estas manifestaciones. Respondemos a convicciones profundas que las hemos concre-

tado en el programa de nuestro partido y que, cuando, en un momento, creímos que era la única solución para el país asociarnos a otro partido, y cuando fuimos altruistas, generosos, sin mirar para un lado y sin mirar atrás a incorporarnos de los primeros a la Federación Nacional emocrática, sentamos como base de nuestra adhesión eso: el afianzamiento político y económico de las autonomías provinciales.

De manera que, al hacer la defensa de esos principios, no hago más que cumplir los anhelos de la provincia y que son los consagrados en el programa de nuestro partido Nada más. (*Aplausos*).

Sr. Villafañe. — Pido la palabra.

Voy a decir muy pocas palabras, señor presidente.

Yo había resuelto pasar en silencio esta cuestión que han analizado los señores senadores por Entre Ríos en forma clara y concluyente. Había resuelto pasarla en silencio, teniendo en cuenta la gravedad del momento que vive la Nación, pero declaro y confieso que el trago me resulta muy amargo. No resisto al deseo de hablar.

Como representante de una provincia argentina siento que la conciencia me dice que más tarde me podrán pedir cuentas diciéndome: ¿qué hizo usted cuando representó a este pueblo y se votó esa ley suicida para la provincia?

El señor senador nos ha dicho y pintado cuál es el caso de Entre Ríos. Yo voy a decir cuál es el caso de Jujuy.

En Jujuy, señor presidente, una hectárea de tierra, con riego, que es lo único que vale, paga 150 pesos de impuestos a la Nación, en unas partes, y en otra 400! Jujuy vive del vino y del azúcar y de lo que se llama el impuesto al consumo.

La hectárea de viña produce alrededor de 50 bordalesas; cada bordalesa tiene dos pesos de impuesto, de manera que el impuesto nacional al vino, viene a resultar a razón de cien pesos la hectárea; además, agréguese a ello el canon de riego, la contribución territorial, los impuestos municipales y resulta gravada la hectárea en 150 pesos! ¡Quién concibe aquí una hectárea arrendada en 150 pesos!

Ahora bien: como sucede actualmente, tenemos tres años desastrosos. Yo lo sé bien, porque soy cultivador de viña. El 12 de Septiembre del año pasado, cayó una helada que acabó con todo. el año pasado ha caído piedra en abundancia, y este año, según me escriben de casa, la langosta está en camino de devorar hasta las piedras. (*Risas*). Mientras tanto te-

nemos que pagar el canon de riego y otros impuestos.

Llevamos tres años de pérdidas, no hay plata, no se ve un centavo, y yo pregunto si es justo que encima de tantas calamidades nos vaya todavía el impuesto a la renta.

Pero no es nada lo del vino; veamos lo que sucede con el azúcar. Hay quince mil hectáreas sembradas con caña. De esas quince mil hectáreas la Nación percibe por concepto de impuesto directo al alcohol, 6.500.000 pesos, de los cuales le devuelve a la provincia, como una gracia, como un obsequio, 7.200 pesos por mes. Es decir, la Nación se traga seis millones quinientos mil pesos, y nos devuelve 84 mil y tantos pesos. *(Risas)*.

El ferrocarril de Perico a Ledesma le costó a la Nación tres millones de pesos, y todos los años, tres ingenios azucareros le abonan a la Nación, cinco millones de pesos por fletes. En esos cinco millones de pesos existen por lo menos, dos millones de impuestos indirectos, porque se cobra tarifa de montaña. La tarifa de montaña es un verdadero cuento del tío. *(Risas)*

Tenemos el caso del ferrocarril de Barranqueras a Metán, donde no existe una loma, donde no existe un metro de terreno desproporcionado, y sin embargo se cobra flete de montaña que importa casi el doble del de la llanura.

A mí me ha sucedido esto. Compré semillas de un pasto aquí, en Buenos Aires — compramos tres amigos —, y nos resultó que el flete nos costaba mucho más caro que la semilla. ¡Esta costaba 100 pesos y el flete 272! Ese es el flete de montaña. Creo que jamás la Nación ni ningún ferrocarril ha hecho un negocio tan bueno como el de Perico a Ledesma: invirtió tres millones para que solamente tres casas le den anualmente cinco millones de pesos!

Esos mismos ingenios le dan 1.500.000 pesos a la provincia por concepto de impuestos al azúcar. No me acuerdo si son dos o tres centavos el kilo. Ese millón quinientos mil pesos se invierte casi totalmente en el sostenimiento de la instrucción primaria.

Agréguese a ello los impuestos municipales y los de otra naturaleza. Si se suma todo resulta que una hectárea de caña soporta más de 400 pesos que paga a la Nación y a la provincia.

Debo hacer notar esto: que la Nación no se ocupa de los caminos de los ingenios a pesar de todo lo que recibe de ellos. Para poder pasar por ahí, a pesar de los millones que abonan, es necesario penetrar por la finca de los

dueños, porque los caminos nacionales son intransitables.

La ley Mitre dispone que se dé un tanto por ciento o por mil del producido de los fletes a las provincias que contribuyen con dicho impuesto. Jujuy contribuye con una cantidad de millones como Salta, Tucumán y otras.

Pedí, siendo gobernador, que me dijeran cuánto había dado la Nación a la provincia en cumplimiento de esta ley. En aquella época ese impuesto había producido como 50.000.000 de pesos. A Jujuy le habían tocado 2.000 pesos, a Salta 8 *(risas)* y a La Rioja 4. *(Risas)*. No sé de dónde saldría ese cálculo. Es una cosa ridícula que está consignada en un documento oficial, en respuesta a una comunicación que dirigí al ministro del interior en ese tiempo.

Nos va a pasar con esto, del producido del impuesto a la renta, lo que pasó con la ley Mitre: se va a quedar toda la plata aquí. *(Risas)*. Va a suceder lo que ha acontecido con los impuestos internos, entre otros con el del alcohol.

Yo lamento que no se encuentre presente el señor ministro de obras públicas para preguntarle qué nos van a dar del producido de la nafta. La única esperanza que podemos concebir de lograr algo de este producido es el que proviene del hecho que el señor ministro es salteño, y los salteños y jujeños no lo vamos a dejar dormir! *(Risas)*.

Y bien; yo no sé cómo se va a aplicar este impuesto a la renta, cuando no hay renta. Yo creía que los de aquí estarían ricos y que a ellos podrían cargar este impuesto porque a nosotros no nos van a sacar nada, porque no vamos a pagar aunque se sancione, por la razón de que nada podemos pagar.

Mañana o pasado voy a presentar un proyecto, en el que espero me acompañarán con su voto todos los señores senadores, a fin de que no nos cobren el canon de riego ni en Jujuy ni en Salta ni en La Rioja y Catamarca, porque no podemos pagar, y porque después de todo, en estos momentos se están pagando impuestos al vino, al alcohol, etcétera, que, como hemos visto, no pueden ser más caros.

Yo me permitiría, pues, proponer este cambio: que más bien se cobrara el uno por ciento en el impuesto a las transacciones y se dejara de lado este impuesto a la renta, que no se lo va a poder cobrar, y que este impuesto a las transacciones, del 1 por ciento, fuera por un año, un impuesto de emergencia, usando la palabra que no le gusta al señor senador Matienzo. *(Risas)*. El remedio, de otra manera, va a resultar peor que la enfermedad. Es el caso de una per-

Mayo 14 de 1932

CAMARA DE SENADORES

10ª Reunión. Cont. de la 4ª Sesión ord.

sona que se ahoga, que le está llegando el agua al cuello y para salvarla se la hunde debajo del agua. (*Risas*).

Nada más.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Galíndez. — Voy a pronunciar breves palabras para expresar algunos conceptos respecto al impuesto a la renta.

Las naciones más modernas y civilizadas del mundo, como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica, Italia, etcétera, han incorporado a su legislación el impuesto a la renta. No obstante ser un impuesto popular, ninguno como él ha sido combatido con mayor violencia y ninguno como él ha sido defendido con mayor apasionamiento. Siempre tuvo este gravamen decididos y ardientes partidarios y adversarios encarnizados e implacables. Siendo esto así, se preguntará: ¿cómo ha logrado imponerse y triunfar en los estados modernos? Sencillamente porque el impuesto a la renta produce mayores recursos al Estado, recursos más elásticos y porque procura al contribuyente una mayor justicia social. Productividad, elasticidad y justicia, he ahí las tres características dominantes de este impuesto.

Y podríamos agregarle una cuarta cualidad o condición: su progresividad, ya que permite al contribuyente pagar sus cargas tributarias de acuerdo a su capacidad económica.

Muchos estados han cifrado en este impuesto la fuente principal de sus rentas y algunos de ellos han salvado grandes crisis debido a su enorme productividad.

Inglaterra, con el impuesto a la renta, durante la guerra, obtuvo centenares de millones de libras esterlinas. Estados Unidos por el mismo concepto obtuvo millares de millones de dólares. Francia el año 1924, apenas diez años después de su aplicación, obtuvo tres mil millones de francos. En algunos estados como Inglaterra fué tomado este impuesto como un expediente de guerra; de ahí su carácter antisocial y odioso. Pero desde 1910 que sufrió una profunda transformación, tomando el carácter de justicia social, constituye el eje y la columna vertebral del sistema financiero inglés.

El aspecto más simpático y popular del impuesto lo constituye la justicia con que se distribuye la carga pública. Los sistemas rentísticos en general, gravaban los consumos, gravitando especialmente sobre las clases medias y las clases pobres. El impuesto a la renta, en cambio, incide más sobre las clases pudientes, sobre los ricos. De ahí, entonces, que surja el relieve de su mayor justicia social.

El impuesto a la renta no es como el de las transacciones, un impuesto de emergencia, que puede salvar a corto plazo, en pocos meses, la situación precaria del tesoro público, porque es un impuesto muy delicado y de difícil aplicación, porque necesita un organismo burocrático muy complejo para la percepción de la renta, porque es un impuesto de carácter personal y sabemos que en los pueblos latinos siempre hay una tendencia innata para tratar de evitar el pago del impuesto, y finalmente porque los funcionarios encargados de aplicarlo deben ser inteligentes, honrados y escrupulosos para no convertirlo en vejatorio y hasta confiscatorio para los contribuyentes.

En nuestro país desde el año 1921, se vienen presentando al Parlamento una serie de iniciativas tendientes a implantar el impuesto a la renta. El ministro de hacienda del primer gobierno radical y los ministros de hacienda del segundo gobierno radical, respectivamente, presentaron sus proyectos al Parlamento sin que ninguno de ellos lograra convertirse en ley; y no se convirtieron en ley, señor presidente, porque el pueblo y el Congreso son, en principio, reacios a la implantación de todo nuevo impuesto; porque todo nuevo impuesto lesiona intereses creados y situaciones fiscales privilegiadas; porque el impuesto a los consumos favorece a las clases pudientes y el impuesto a la renta trata de hacer desaparecer esos privilegios; porque en aquella oportunidad el impuesto a la renta fué objetado con reparos constitucionales muy atendibles que todavía subsisten, desde el momento que no se ha reformado la carta fundamental de la Nación, y, finalmente, porque en aquella época las entradas aduaneras estaban florecientes y eran nuestra principal fuente de recursos, y no gravitaba sobre el país la enorme crisis financiera y económica que hoy agobia a la Nación. El eminente profesor y financista Gastón Jèze dice: que para implantarlo en la República Argentina se necesitan dos condiciones esenciales: audacia y prudencia. Audacia para triunfar victoriosamente de las resistencias injustificadas y prudencia para resistir victoriosamente a las exageraciones demagógicas.

Seguramente el Gobierno Provisional, al crearlo, tuvo en cuenta estas dos condiciones y si no las observó con toda cautela, al menos trató de implantarlo creando un impuesto relativamente sencillo dentro del complejo mecanismo del impuesto a la renta, tratando de aclimatarlo sin concitar las resistencias y protestas del pueblo.

El gobierno y el Congreso deben ser pruden-

tes en su aplicación, buscando de armonizar su climatología política, económica y financiera, con la idiosincrasia de nuestro pueblo, para arraigarlo con espíritu de verdadera justicia social.

Siendo la Nación un país eminentemente agrícola y ganadero, tendrá que adaptarlo a sus modalidades, salvando las dificultades emergentes de la enorme latitud de nuestro suelo y a los aspectos rudimentarios de nuestras industrias para aclimatarlo y convertirlo en un impuesto eminentemente argentino. El mal no está en la creación del impuesto a la renta, sino en dejar subsistentes una serie de gabelas, que sobresaturan las cargas tributarias.

El señor senador por la Capital doctor Mario Bravo, en su discurso muy elocuente de la sesión del jueves, decía lo siguiente: «Ya en una conferencia en la Bolsa de Comercio el ministro de hacienda del Gobierno Provisional anunciaba la reforma impositiva con la incorporación del impuesto a la renta. ¡Qué impuesto a la renta! ¡Pero si eso es una caricatura del impuesto a la renta! ¡Qué impuesto a la renta!»

«Ocho millones darán las tierras de los 2.900.000 kilómetros cuadrados de la República. Treinta y ocho millones darán los diez millones de habitantes. ¡Renta!... impuesto al trabajo, impuesto a la industria y al comercio, impuesto al salario, porque no se escapan, gracias a la sanción de la Honorable Cámara, únicamente sino aquellas entradas que llegan al mínimo de lo imponible, porque no se puede llamar renta a la miseria y a los salarios de hambre que se pagan en el país.»

El señor senador por la Capital tenía razón y hacía la observación con plena justicia. Efectivamente, el mayor gravamen se establece sobre el comercio, sobre la industria y sobre el trabajo personal.

La Comisión de Hacienda y Presupuesto del Honorable Senado ha tenido algunos requerimientos al respecto; entre ellos la de una comisión de médicos que ha concurrido para manifestar a la Comisión que la tasa del impuesto es muy elevada.

Por otra parte, el doctor Matienzo, senador por Tucumán, hacía notar lo mismo respecto a los profesionales: a médicos, abogados, ingenieros, escribanos, que recién terminan su carrera y que al instalarse necesitan abrir su consultorio o escritorio y muchos de ellos alquilar su casa cuando no la tienen propia, el impuesto se les calcula sobre una renta presuntiva cuatro veces mayor del alquiler de la casa; y hacía notar, también, todos los inconvenientes que trae aparejados la tasa de los im-

puestos. Estamos en situación de podar, corregir, estos inconvenientes de la ley. El mal no está precisamente en la creación del impuesto a los réditos; el mal está en la creación del impuesto a la renta como gravamen nacional, puesto que es del exclusivo resorte de los estados autónomos. La superposición de los impuestos trae como consecuencia que el Congreso tenga que ocuparse a corto plazo de la revisión y remozamiento de nuestro sistema tributario, que no sólo es atrasado y anacrónico, sino que no está de acuerdo con el progreso social y es anti-económico. Sólo así podrá corregir las fallas y los inconvenientes que traen aparejados la doble y la triple imposición de la Nación, las provincias y los municipios.

Desgraciadamente ni el Poder Ejecutivo, ni la Cámara de Diputados, han subsanado esos inconvenientes y sólo el Congreso podrá salvar o resolver esos problemas una vez que se aboque al conocimiento y la reforma del sistema tributario argentino. La prensa nacional, desde hace mucho tiempo, viene puntualizando estos errores y pidiendo que se busque un remedio para conjurar estos males; pero desgraciadamente no se ha llegado hasta el presente a ninguna solución práctica y satisfactoria, trayendo como consecuencia inmediata la suba desmesurada de los artículos de primera necesidad, especialmente gravados con los altos fletes ferroviarios para las provincias del Centro, del Oeste y del Norte argentinos y, como consecuencia inmediata, el aumento del costo de la vida.

Voces muy autorizadas, señor presidente, se han levantado en distintas provincias para advertir al Congreso que tratándose de impuestos directos, corresponde a los estados autónomos su ejecución y su legislación. Los gobiernos de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y Mendoza, han hecho llegar al seno del Parlamento sus reparos constitucionales defendiendo la verdadera doctrina constitucional.

Voces igualmente calificadas, se han levantado en los grupos políticos de la Honorable Cámara.

Los sectores demócrata nacional, demócrata progresista e impersonalista han levantado su voz de alarma y de protesta desde sus altas tribunas para hacer conocer al país lo grave que significaría, si la Nación, a título de remediar las angustias y tribulaciones financieras por que atraviesa el país, substraiera a las provincias el derecho que le acuerda la Constitución en materia impositiva, robusteciendo un centralismo rentístico y político que podría

Mayo 14 de 1932

CAMARA DE SENADORES 10ª Reunión. Cont. de la 4ª Sesión ord.

poner en peligro la vida institucional de la República y el federalismo creado por nuestra Constitución.

Y estoy seguro, señor presidente, que los demás gobernadores que no han expresado sus puntos de mira, y los parlamentarios que tampoco han tenido oportunidad de expresar sus opiniones, quizá por no prolongar demasiado el debate de esta Honorable Cámara, estén contestes con esta tesis y solidarios en el fondo con la doctrina sustentada por los gobernadores de provincia, que es la verdadera doctrina constitucional.

Dejo los aspectos doctrinarios para los maestros del derecho constitucional, pero sostengo categóricamente que por tratarse de impuestos directos corresponde exclusivamente a los Estados argentinos su imposición y su legislación.

No desconozco, señor presidente, el caso de excepción que plantea el inciso 2º, artículo 67 de la Constitución nacional, cuando faculta al Congreso para sancionar impuestos directos por tiempo determinado, e igualmente proporcionales en todo el territorio de la Nación.

Sr. Matienzo. — Transitorios..

Sr. Galíndez. — Por tiempo determinado.

Sr. Matienzo. — Ese es el concepto.

Sr. Galíndez. — Por tiempo determinado en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad y bien general del Estado lo exija.

Muchos constitucionalistas sostienen que estas tres condiciones: defensa, seguridad y bien general del Estado deben ser concurrentes y no deben obrar por acción dispersiva.

Felizmente en el horizonte de nuestra patria no se cierne ningún nubarrón que pueda empañar el cielo internacional. Ninguna agresión nos amenaza; ninguna conmoción interior pretende perturbar el progreso material e institucional de nuestra República. Queda, entonces, en pie únicamente el bien general del Estado, que es como la salud, como la vida misma de la Nación. Y por eso el Congreso ha de tratar de sacar a la República de esta situación difícil porque atraviesa en esta hora de su vida histórica, para tonificar su comercio y sus industrias, para rehabilitar su crédito y para llevar la tranquilidad a millares de hogares argentinos.

La Honorable Cámara de Diputados ha creído o ha pretendido salvar en parte los derechos inalienables de las provincias en materia impositiva. El artículo 1º limita a tres años la vigencia de la ley y prescribe que a partir del 1º de Enero de 1934 una ley del Congreso de-

terminará la forma en que deba dividirse el producto de los impuestos entre la Nación y las provincias. Si en esa fecha no se hubiese dictado, la ley quedaría derogada. Pero si la Honorable Cámara se hubiera tomado el trabajo de averiguar a las provincias el estado de sus deudas internas o externas, flotantes o consolidadas y el monto del déficit que grava sobre sus respectivos presupuestos, habría llegado a la triste y desconsoladora conclusión de que tanto a la Nación como a las provincias afligen las mismas angustias financieras y quizá a las provincias en grado superlativo.

El ex director de Impuestos Internos de la Nación, doctor José Manuel Ahumada, hombre estudioso y dedicado a esta clase de materias, articuló un juicioso proyecto que elevó al Poder Ejecutivo de la Nación, distribuyendo el producto de los impuestos internos equitativamente entre la Nación y las provincias. Ejercía el Poder Ejecutivo en esa época el doctor Marcelo T. de Alvear.

El proyecto innovado, modificado, llegó al Congreso; desgraciadamente, aquel Poder Ejecutivo no tuvo la suficiente influencia política y gubernamental para hacerlo triunfar en el seno del Parlamento, lo que constituyó una situación sensible, porque era un proyecto altamente beneficioso para los intereses generales de las provincias.

Adivino, señor presidente, el argumento en contra. Se me dirá que la Nación devuelve en cambio a las provincias grandes cantidades, sumas cuantiosas. Efectivamente, en lo que se refiere a las provincias llamadas pobres, la afirmación es exactísima y podría decir que lo mismo ocurre respecto a los demás Estados argentinos.

Pero todo esto se hace, señor presidente, a costa de un centralismo que no sólo es repugnante al espíritu de nuestra Constitución, sino que siempre va en detrimento de la autonomía financiera y económica de las provincias. Y aquí vienen bien las palabras tan elocuentes del señor gobernador de Entre Ríos, doctor Etchevehere, cuando le dirigió una carta al gobernador de Santa Fe, doctor Molinas, que dice lo siguiente: «Porque es verdad que no hay autonomismo posible dentro de un sistema tributario que concentra en el gobierno central los rubros más productivos de la renta, aun cuando se busquen compensaciones en el curso deprimente de los subsidios.

«La situación de subordinación excesiva que ella genera, arruina el concepto de la personalidad política de los Estados federales y nos

aproxima cada día más al centralismo gubernamental que no es el de la Constitución, ni está en la predilección de los pueblos de las provincias.» Más adelante agrega: «Hemos hecho del gobierno central un organismo excesivamente poderoso, que no es el que quisieron forjar nuestros instituyentes, y que, debido a esto, ha sido el factor principal o muchas de las perturbaciones que ha soportado la Nación.»

Nada más elocuente que estas palabras, dichas con entera valentía, justamente en el preciso momento en que el Congreso pareciera declinar de sus facultades para defender a los Estados autónomos y a nuestro federalismo, tan castigado por las arremetidas y los avances de un centralismo político y rentístico, absorbente y morbosos.

Nada más, señor presidente.

Sr. Matienzo. — Pido la palabra.

Yo esta vez voy a ser más breve que de costumbre, porque los señores senadores que han hablado antes han tocado este tema con mucha extensión y mucho acierto, a mi juicio.

No necesito entrar en el examen económico de los impuestos que se acaban de analizar, porque esto ha sido hecho perfectamente bien por los señores senadores preopinantes. Voy simplemente a recordar algún antecedente constitucional que interesa tener presente.

En Estados Unidos, la Constitución disponía, también, como la de la República Argentina, que los impuestos directos establecidos por la Nación deben ser proporcionales a la población de cada Estado, y necesitando el gobierno de la Nación recurrir al impuesto de la renta, fué este impuesto una vez declarado inconstitucional por la Corte Suprema. Entonces, la segunda vez que ocurrió esta necesidad, se recurrió previamente a la reforma de la Constitución, y la enmienda 16 tiene precisamente ese objeto: eliminar la cláusula de la proporcionalidad a la población, autorizando al Congreso de la Nación a sancionar esta clase de impuesto sin sujetarse a esa proporcionalidad.

Pero, Estados Unidos no tiene la viveza criolla que tenemos nosotros; allí se pensó que era necesario reformar la Constitución, se convocó al Congreso y se usaron todos los resortes que establecía la Constitución vigente para la reforma. Entre nosotros no hay necesidad de eso: las medidas se declaran de emergencia y se viola la Constitución. (Risas). Esa viveza criolla no la conocen en Estados Unidos.

A mí me parece señor presidente, que el análisis que hizo uno de los señores senadores por

Entre Ríos, de los impuestos en cuanto a su faz constitucional, está bien hecho. Solamente voy a permitirme una pequeña ampliación.

La Constitución establece en su artículo 4º cuales son los impuestos genuinamente nacionales, y voy a leer de nuevo el texto que ya ha leído el señor senador Eguiguren.

Dice la Constitución en su artículo 4º: «El gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del tesoro nacional, formado del producto de derechos de importación y de exportación, del de la venta o locación de tierras de propiedad nacional; de la renta de correos; *de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso general y de los empréstitos y operaciones de crédito que decreta el mismo Congreso para urgencia de la Nación, o para empresas de utilidad nacional.*»

De este texto resulta clarísimo, que un recurso no expresamente enumerado en la Constitución, es decir, que no es renta de aduana, renta de correo ni renta de bienes raíces, está comprendido entre todas las demás contribuciones que establezca el Congreso y que tienen que ser repartidas proporcionalmente a la población.

Esto está confirmado por el artículo 67, inciso 2º que establece: «imponer contribuciones directas por tiempo determinado» — como decía el señor senador Galíndez — «y proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la seguridad común y bien general del Estado lo exijan.» No hay duda que siendo este un impuesto que no está enumerado en el artículo 4º, siendo un impuesto directo, tiene que ser establecido de un modo proporcional a la población y por tiempo determinado. Ahora, si la urgencia de la Nación es tan grande que nos obliga a nosotros a establecer este impuesto, no podemos, por razones de emergencia, hacer lo que hace la Cámara de Diputados, que fija un plazo para que oportunamente se reparta entre la Nación y las provincias ese impuesto. No, señor; no se puede repartir, por una razón: porque lo usufructúa la Nación o lo usufructúan las provincias, y los impuestos que no están establecidos en la Constitución tampoco, porque en virtud del artículo 104 de la Constitución, todas las facultades no delegadas a la Nación por la Constitución, pertenecen a las provincias.

A mí se me ha ocurrido, señor presidente, que en caso que la Cámara crea necesario votar este impuesto, tiene que ajustarlo a la

Mayo 14 de 1932

CAMARA DE SENADORES

10ª Reunión. Cont. de la 4ª Sesión ord.

Constitución nacional y para ese caso propongo la siguiente cláusula a continuación del primer párrafo del artículo 1º: «A los efectos del artículo 4º de la Constitución, una vez terminada la recaudación del impuesto se liquidará lo que corresponda a cada provincia, territorio o a la Capital, en proporción a su número de habitantes, según el último censo nacional. La Nación devolverá a cada provincia la cantidad que en ella hubiera sido recaudada de más y le cobrará la cantidad que hubiera sido pagada de menos.»

De esa manera, a posteriori se establecería la proporcionalidad que fija la Constitución; y si no, habría que hacer esto: distribuir los cincuenta millones calculados preventivamente, diremos así, entre las provincias, con arreglo a la población de cada una de ellas, lo que podría ocasionar muchos errores. La única forma de establecer la proporcionalidad, sería a posteriori, como acabo de decirlo.

Con esto doy prueba de colaborar en las soluciones nacionales de orden financiero, pero siempre que las leyes se ajusten a la Constitución, de la cual yo no me voy a apartar; de manera que aunque quede solo en el Senado, aunque todo el mundo vote en contra, yo voy a votar por la Constitución.

Sr. Serrey. — Pido la palabra.

Había pensado votar silenciosamente contra este proyecto, porque abrigo las mismas convicciones que con tanta elocuencia ha manifestado el señor senador por Entre Ríos.

Entiendo que esta ley conspira más que contra la letra contra el espíritu de la Constitución, contra el sistema federal de gobierno al abolir de hecho la autonomía económica de las provincias, y sin autonomía económica no existe autonomía política. Pero el señor ministro de hacienda me observó que al no sancionarse esta ley desaparece la posibilidad de establecer el equilibrio del presupuesto y ante la suprema necesidad de la Nación, voy a sacrificar mis opiniones personales, o como decía el doctor Magnasco, mi honradez intelectual. Empero, si ha de votar el Honorable Senado esa ley en general, no creo que un senador de las provincias argentinas pueda aceptar el agregado de la segunda parte del artículo 1º, porque esto importa convertir el impuesto en permanente y al hacerlo permanente es contrario a la letra del artículo 67, inciso 2º de la Constitución que solamente permite poner contribuciones directas por tiempo determinado. De tal manera que como condición de mi voto, que ya digo lo hago contrariando mis convicciones propias,

propongo que se suprima del artículo 1º «y por el término de tres años» y que se suprima la segunda parte, y, en cambio, se agregue un segundo párrafo que diga — como en el impuesto a las transacciones — «el presente impuesto caducará el 31 de Diciembre de 1934»

Esta es la única manera de hacerlo transitorio como lo quiere la Constitución. Podemos apartarnos de su texto de una manera provisional, pero hacerlo ya de una manera definitiva, es afirmar que la Constitución es un libro muerto y aunque no estoy apegado a ella, como el señor senador Matienzo, creo que ajustarnos a ella en todo momento, es la única manera de hacer que el sistema republicano viva.

He terminado.

Sr. Eguiguren. — Pido la palabra, para hacer una pequeña rectificación.

Mi estimado colega el señor senador Galíndez en el curso de su exposición exaltando las condiciones favorables de este impuesto, dijo que en realidad recae sobre las rentas más grandes de la población. ¿No es así, señor senador?

Sr. Galíndez. — He hecho una lectura de una referencia del ilustrado señor senador por la Capital, doctor Bravo.

Sr. Eguiguren. — Quiero simplemente hacer el análisis de unas cuantas cifras para poner de manifiesto lo que dije al principio, que en realidad este impuesto es un impuesto al trabajo, a la industria, al comercio, a las necesidades primordiales y que los que menos resultan gravados son los grandes capitales y las grandes rentas.

Observen los señores senadores. Según el cálculo de la Comisión, la renta del suelo se calcula en 8.500.000 pesos. Ahora, esa renta del suelo se distribuye entre propietarios que trabajan directamente sus campos y propietarios que los arriendan. Los propietarios que trabajan directamente sus campos son en realidad productores y el impuesto, en ese caso, recae sobre la producción. Y cuando arrienda, el impuesto no lo va a pagar el propietario, va a incidir sobre el arrendamiento, vale decir, también sobre el productor.

Segundo, los valores mobiliarios calculados en 17.500.000, se pueden en realidad distribuir dentro de un cálculo prudente, y discriminar estas cifras en diez millones en hipotecas y el resto en algunos otros valores mobiliarios. Esos diez millones en hipotecas no van a ser pagados por los rentistas, los capitalistas o los usureros; van a pagarlos, como ya dije al principio, los deudores.

Acaban de darme esta información preciosa que confirma lo que adelantara antes.

Aquí en la Capital ya se ha ideado el procedimiento adecuado para llenar esa «noble» finalidad. Sabido es que casi todos los deudores hipotecarios están en mora; entonces los acreedores, que son sumamente cautos, prudentes y previsores, se han adelantado y les han dicho a los deudores morosos: si, les vamos a esperar, pero firmando un documentito anticipado por el importe de la renta que va a venir; en caso contrario los ejecutamos inmediatamente.

¿Que hacen los deudores? Pasar por esas horas caudinas.

El impuesto en este rubro, valores mobiliarios, en diez millones de pesos va a caer, no sobre las grandes rentas o las grandes fortunas sino sobre el infortunado que ha llegado a esa situación.

El tercer rubro calculado en quince millones de pesos, comercio e industria, recae en pocas palabras, sobre los intermediarios de la producción, quienes no van a soportar el impuesto, lo van a hacer incidir en definitiva sobre los consumidores.

Cuarto. Seis millones calculados en renta al trabajo; de más está decir que aquí lo que se grava no es el capital o la renta social producida sino el fruto menguado del trabajo individual.

Por último, queda la renta global por cuatro millones; efectivamente en este rubro sí creo que corresponde en su mayor parte a las grandes rentas y a los grandes capitales.

En resumen resulta que de los cincuenta y un millones calculados para ese impuesto, cuatro millones inciden y van directamente sobre los grandes capitales y las grandes fortunas; los 47 millones los pagan los productores, los trabajadores, los comerciantes, los industriales, es decir 47 millones sobre la menguada producción en este momento realmente crítico dentro de la economía del país.

Estas cifras destruyen, en mi concepto esa aseveración de que este impuesto es un impuesto a las grandes fortunas o a los capitales. En realidad en cuanto al desequilibrio, si se llegara a rechazar este impuesto no creo que él sea extraordinario. Me parece que hay un optimismo exagerado al calcularlo en 51 millones de pesos.

Como lo ha dicho elocuentemente el señor senador por Jujuy, es difícil cubrir un impuesto a la renta cuando la renta no existe; cuando la gente de las provincias se está debaten-

do en la miseria; cuando no pueden pagar los impuestos provinciales mal podrán pagar los impuestos nacionales. De manera que, repito, señor presidente, creo que el desequilibrio se va a producir fatalmente y por eso es que previendo esa situación como ya lo dije hoy y no queriendo hacer una crítica negativa o destructiva, pedí y obtuve que como previsión se incorpore la facultad concedida al Poder Ejecutivo para recurrir a todos los procedimientos de emergencia — y discúlpeme el señor senador por Tucumán, que incurra en esa palabra, — todos los procedimientos de emergencia para salvar las situaciones que se puedan plantear.

Sr. Ceballos Reyes. — Pido la palabra.

Después de las exposiciones de los señores senadores, referentes al impuesto a los réditos, yo no puedo permanecer en silencio sin manifestar la situación por que atraviesa La Rioja, y no solamente La Rioja, sino todas las provincias del Norte como Catamarca, Santiago del Estero y Jujuy.

Allí no se conoce la moneda argentina, allí se paga al comercio con especies, cuero de cabrito, mantas de vicuña, que se las cambia al comerciante, y en esa forma viven. Nuestro comercio está completamente anulado. Antes se vendía el ganado vacuno a Chile, pero hoy no podemos venderle un solo animal. No podemos pagar los cánones de riego al gobierno de la Nación. De manera que en esta forma, estas provincias ¿podrán cumplir con esta ley? Me parece que será completamente imposible.

En lo que respecta a los profesionales, lo mismo. Allí no se ganan los grandes sueldos de la Capital Federal por una operación, por un tratamiento clínico que puede durar 15 días o un mes. En esas provincias trabajando todo el día apenas si se consigue ganar 500 pesos mensuales, y eso con raras excepciones. Por este motivo y sin querer poner un obstáculo a este proyecto, voy a votar en contra.

Nada más.

Sr. Arancibia Rodríguez. — Pido la palabra.

Se ha complicado el debate sobre el impuesto a los réditos en una forma que parecería afectar hasta el amor propio provinciano y autonómico de los senadores que estaríamos de acuerdo en principio y en general con el proyecto en discusión, y por esta razón tengo que pronunciar dos palabras para dar los fundamentos del voto que voy a emitir, ajustándolo a convicciones y actitudes que en mi modesta vida parlamentaria he adoptado siempre, defen-

Mayo 14 de 1932

CAMARA DE SENADORES

10ª Reunión. Cont. de la 4ª Sesión ord.

diendo en más de una ocasión la autonomía de las provincias y sus derechos políticos y económicos.

Empezaré por aclarar un punto que a mi juicio no está claro y es el que se refiere a la inconstitucionalidad del impuesto.

Yo creo, señor presidente, que el impuesto tal como está proyectado, sin el carácter de permanente, que parece quiere dársele por el último apartado de este artículo, es completamente constitucional. Y no ha sido por motivos de viveza que se ha proyectado así ni que se haya pasado por encima de textos expresos de la Constitución, sino por que la interpretación que se le da no es a mi juicio exacta y porque los precedentes que han invocado no son estrictamente aplicables en nuestro país.

En Estados Unidos fué necesario reformar la Constitución, porque esa Constitución no tenía la cláusula que tiene la nuestra, que le permite establecer al Gobierno Federal contribuciones directas por tiempo determinado, en todo el país. Y en cuanto a la proporcionalidad y equidad, yo considero que es un requisito perfectamente cumplido, de acuerdo con la jurisprudencia uniforme de la Corte y la interpretación de los constitucionalistas, porque consiste en que el impuesto vaya en igual forma a igualdad de situación, es decir que todos los habitantes del país sean tomados en la misma posición, con igual impuesto.

Estos son los requisitos constitucionales, que a mi juicio reúne el proyecto en discusión.

La provincia de San Luis, a la que tengo el honor de representar en esta bar ca, se encuentra sometida a la misma angustia, a las mismas vicisitudes que se han enunciado aquí en el curso del debate, si bien un tanto exagerados por los señores senadores que extreman los argumentos para rechazar este impuesto; llevando «latu sensu», ese argumento, tomándolo con el alcance que se le quiere dar en este debate, podría demostrarse también que ninguno de los otros impuestos debería votarse y que lejos de aumentar algunos, habría que suprimirlos o aminorarlos, para salvar una situación tan extraordinaria y angustiosa; pero la angustia que a mí me preocupa antes que todo y me domina en este momento, es la angustia de la Nación, que es el conjunto que debemos resguardar, porque derrumbándose ella, arrastra consigo a todas las partes que la componen.

Por consiguiente, señor presidente, desde este punto de vista autonómico y económico del asunto, salvo los escrúpulos que sin duda asaltarían el espíritu de un provinciano como yo,

si al votar una ley perjudicase a mi pueblo, sin estar firme y patrióticamente convencido que se consultan los grandes y apremiantes intereses de todo el país.

Pero es indudable que el proyecto debe mantenerse en los límites de la transitoriedad, de la precariedad, con que la Constitución lo autoriza, es decir que debe ser temporal, como lo establece la Constitución, porque de lo contrario sería una violación, a mi juicio, flagrante, del artículo 67, inciso 2º. Por eso no voy a votar la parte del artículo que lo declara permanente y sí la modificación del senador Serrey.

De otro punto de vista ante la ausencia de un proyecto orgánico y concreto que permitiera al Poder Ejecutivo en estos momentos, disponer de una cantidad siquiera parecida para reforzar el cálculo de recursos, en sustitución de lo que va a producir el impuesto a la renta, en ausencia, repito, de una idea central y concreta, que nos lleve a restablecer el equilibrio y evitar un verdadero derrumbe, que se produciría en ese cálculo de recursos, me someto, con todo sentimiento, autonómico y provinciano, como soy, a las razones patrióticas y a la necesidad general de mantener su equilibrio que, de no conseguirlo, echaría por tierra todo lo que estamos legislando, y comprometería el crédito y prestigio de la Nación.

Por consiguiente, señor presidente, dejando así expuestos los fundamentos de mi voto voy a darlo en el sentido de que el impuesto se establezca sin carácter de permanente, tan sólo por un término de tres años, si antes no puede levantarse.

Sr. Vidal — Pido la palabra.

Sr. Presidente — La había pedido con anterioridad el señor senador por Santiago del Estero.

Sr. Montenegro. — Se la cedo al señor senador.

Sr. Vidal. — Las reformas que se proyectan con el plan impositivo sancionado por la Honorable Cámara de Diputados y que con algunas modificaciones está considerando el Honorable Senado no puede sostenerse que sea la solución científica y más conveniente de este arduo problema, ni que se haya podido contemplar al proyectarlas los complejos intereses de diverso orden que en un trabajo bien meditado debe estudiarse; pero sí la única solución posible para poder llegar al equilibrio del presupuesto, que es la base indispensable para que pueda tener éxito cualquier plan financiero.

Las objeciones que se han formulado a este

impuesto, son en cierto modo muy atendibles, pero ninguno de los senadores que han objetado este impuesto, han indicado la forma de reemplazarlo para que pueda mantenerse y obtenerse los recursos necesarios que hagan posible el equilibrio del presupuesto, teniendo en cuenta la situación agustiosa del país que necesita imprescindiblemente aumentar sus recursos.

Si a este proyecto se hubiera propuesto sustituirlo con otro más ventajoso, yo me explicaría la resistencia de los señores senadores para votarlo, pero si el dilema se presenta en la forma en que está planteado, o se vota este impuesto con todos sus inconvenientes o se sanciona un presupuesto desequilibrado, que impondrá mayores sacrificios al país, creo que el Honorable Senado no puede dejar de prestarle su voto.

Las objeciones que se hacen respecto a su constitucionalidad y que afecta la autonomía económica de las provincias no creo tampoco que puedan sostenerse en la forma en que han sido planteadas. No creo, señor presidente, que la autonomía política y económica de las provincias pueda depender de tal o cual impuesto, y el caso que se ha citado de Estados Unidos es la prueba más evidente de ello.

En Estados Unidos se han respetado las autonomías de las provincias, y los estados gozan de prosperidad económica. En ningún momento han estado amenazados, ni se han multiplicado las intervenciones como ha sucedido en nuestro país, y sin embargo el impuesto se ha establecido, y se ha llegado a la reforma constitucional para poder hacer posible el establecimiento de este impuesto con carácter permanente.

Entre nosotros las autonomías de las provincias no han sido nunca sacrificadas a un interés nacional; han sido sacrificadas a intereses políticos subalternos, a intereses de partidos, o a intereses de gobernantes autoritarios, nunca a un interés nacional.

Yo no creo, señor presidente, que puede haber antagonismo entre los intereses de las provincias y los intereses de la Nación; todo lo que perjudica a la Nación perjudica a las provincias, y todo lo que perjudica a las provincias perjudica a la Nación. Creo que hay una solidaridad absoluta entre los intereses de la Nación y los intereses de las provincias.

Por eso, señor presidente, creo que no puede negarse el voto a un proyecto que es el único indicado como el medio de resolver la situa-

ción difícil financiera por que atraviesa en este momento la Nación.

En cuanto a las objeciones de carácter económico hechas a este proyecto, creo que son completamente injustas.

El impuesto a la renta es evidentemente mucho más justo y más equitativo que todos los impuestos existentes, porque es proporcional a los recursos económicos del contribuyente. Los impuestos actuales gravan en la misma forma al pobre y al rico, sin guardar la proporcionalidad que está establecida en este impuesto.

Las otras objeciones respecto a los títulos que quedan libres de este gravamen, son también completamente injustificadas, tratándose del impuesto a la renta. Precisamente este impuesto es el único que alcanza a muchas riquezas que están actualmente libres de todo gravamen, sin que haya nada que pueda justificar esta situación privilegiada.

Los intereses de los depósitos de los bancos, los dividendos de las sociedades anónimas que actualmente no tienen ningún gravamen, quedan afectados por este impuesto. En cuanto a los títulos nacionales, que se han presentado como un argumento en contra de los impuestos, es sabido que responde a intereses y motivos de otro orden. Los títulos nacionales están exentos de todo gravamen, porque es la forma adoptada en todas partes para que estos títulos puedan tener la aceptación dentro y fuera del país, que es necesario para que la Nación pueda hacer uso de su crédito en la proporción que necesita para atender las necesidades públicas. Si se estableciera un gravamen a los títulos nacionales, sería muy difícil que encontraran cotizaciones ni dentro ni fuera del país. De manera, que es un argumento falso el que se hace presentando estos intereses como un argumento en contra del impuesto a la renta. Todas las otras rentas, que por nuestras leyes quedan exentas de impuestos, quedan comprendidas perfectamente, y esa es una de las ventajas principales, en este impuesto.

No creo necesario, señor presidente, molestar más la atención de la Cámara para demostrar la necesidad de solicitar el voto del Congreso para un impuesto en las condiciones de éste.

En cuanto a la segunda parte del artículo 1º, que ha sido objetado también, yo creo, señor presidente, que ese artículo no hace sino limitar el tiempo en que este impuesto debe estar en vigencia. Si se suprimiera esa segunda parte, el impuesto a la renta tendría la duración de tres años; si se mantiene la se-

Mayo 14 de 1932

CAMARA DE SENADORES

10ª Reunión. Cont. de la 4ª Sesión ord.

gunda parte de este artículo, el impuesto a la renta sólo durará año y medio, de manera que existe la conveniencia de que se mantenga la segunda parte del artículo 1º, con más razón por los que consideran que este impuesto es inconveniente.

Nada más, señor presidente.

Sr. Montenegro. — Pido la palabra.

No he de entrar, señor presidente, a discutir las buenas razones que han dado los señores senadores para fundar sus ideas respecto de las autonomías provinciales y las importantes erogaciones que significan para los habitantes del interior, pero no se me escapa que atravesamos por un momento tan grave que la Nación reclama en este momento de todos sus habitantes la suma de sus sacrificios.

Tampoco se me escapa, señor presidente, que en estos momentos difíciles para la situación económica de la Nación, las provincias todas deben contribuir a salvarla de este estado por demás calamitoso, que al fin y al cabo ha sido culpa de unos cuantos hombres que gobernaron el país en forma que no quiero calificar.

Yo, como representante de una provincia del interior, tendría que oponerme, por las mismas razones dadas por los señores senadores que han hablado de las grandes dificultades que este impuesto acarreará para el interior de la República; pero, en atención a lo que acabo de exponer, sobre todo pensando que en estos momentos el impuesto significa una necesaria contribución de mayores sacrificios, creo que con esto se debe considerar salvado todo otro concepto, hasta de orden legal, porque no debe invocarse ni la misma ley cuando se trata de los altos y sagrados intereses de la República.

Creo, señor presidente, por otra parte, que no es ahora el momento oportuno, cuando estamos capeando dificultades serias, de tratar de restablecer lo que una especie de derecho consuetudinario ha establecido, violando el derecho constitucional.

Es cierto, en mi sentir, que se ha vulnerado el derecho económico de las provincias en muchas oportunidades, en lo que a impuestos se refiere. Es cierto, también, que los propios impuestos llamados internos, son un avance contra el derecho y la autonomía de las provincias. Estoy de acuerdo con este criterio, y creo que el impuesto que actualmente nos ocupa es asimismo ilegal, inconstitucional si se quiere, pero, si ya se ha establecido, si ya se ha hecho una práctica y si las necesidades de orden público así lo han exigido y se han venido observando

hasta ahora estas normas, para reaccionar contra ellas es necesario esperar el momento oportuno, para poder hacer en forma orgánica una reconsideración a todos estos avances.

Pero, en este momento en que estamos abocados a una difícil situación, en este momento en que todos debemos sumar actividades, debemos sumar sacrificios, tenemos que hacer todo lo que nos sea posible para salvar al país; creo que no es la oportunidad de hacer objeciones, ya que el estado económico de la Nación exige este sacrificio, con todo el imperio de una necesidad sentida y de orden público.

Por estas razones, señor presidente, y no obstante ser representante de una provincia del interior que en estos momentos sufre como la que más las consecuencias de este estado calamitoso, no obstante ello, repito, voy a votar a favor del despacho de la Comisión, porque entiendo que un quebranto del cálculo hecho para poder subvenir a las necesidades públicas, sería más grave que todo lo demás; y espero que ante las buenas razones que existen, en el futuro estas enmiendas que acabo de señalar serán tratadas por la Honorable Cámara en forma perentoria y eficiente, a fin de restituir a las provincias esos derechos que poco a poco se les ha ido cercenando para los intereses colectivos de la Nación.

Nada más, señor presidente.

Sr. Vidal. — Pido la palabra, para manifestar, a nombre de la Comisión, que acepta la modificación propuesta por el señor senador por Salta al artículo 1º.

En el seno de la comisión, yo le había manifestado al señor ministro de hacienda la conveniencia de que se redujera ese término de este impuesto, idea que no tuvo aceptación: se consideró inconveniente limitar más el término establecido; pero en vista de las manifestaciones hechas por algunos señores senadores, que consideran que la segunda parte de este artículo lo puede estimarse como un reconocimiento de que puede dársele un carácter permanente, la Comisión acepta la modificación propuesta por el término de dos años y medio, tiempo que se considera suficiente para que puedan obtenerse los recursos calculados.

Sr. Bravo. — Pido la palabra.

Voy a decir muy pocas para expresar la disidencia en contra del despacho de la mayoría de la Comisión.

Esta actitud es contraria a la que ha asumido el grupo socialista en la Cámara de Diputados, en la que apoyamos el despacho de la Co-

misión, por dos razones: Primera, porque importaba incorporar al mecanismo impositivo argentino el principio del impuesto a la renta, consagrado en nuestro programa político principalmente en lo que atañe a la renta del suelo y después, porque teníamos la esperanza de poder mejorar el despacho de la Comisión incorporando algunos de los enunciados presentados en el proyecto de la minoría socialista.

Esta segunda parte de nuestra esperanza no se cumplió, ninguna de nuestras indicaciones fué aceptada.

El despacho de la mayoría de la Comisión de Presupuesto del Senado empeora, a nuestro juicio, el proyecto de la Cámara de Diputados y la modificación que acaba de incorporarse le da a este proyecto una vigencia tan transitoria, que la aplicación o aceptación del principio es, puede decirse, prácticamente inútil.

Frente al régimen impositivo que está aceptando la Cámara, en que la Aduana, con sus 290 000 000 pesará sobre la masa de la población argentina, los impuestos internos, con su centenar de millones, sobre el comercio y el consumo argentinos; las transacciones, con sus 50 000 000, sobre el comercio, la industria y el consumo argentino; el impuesto sobre la renta, con los 50 000 000 de los cuales apenas puede decirse cuatro o cinco millones recaerán sobre la renta del suelo, todo el impuesto pesará sobre la masa de la población argentina, sin afectar ninguno de los privilegios de nuestro régimen económico.

Nos negamos, en consecuencia, a prestar el apoyo a esta ley, que significará empeorar la forma de extraer recursos para sostener un presupuesto que no ha sabido presentarse ante el país en las condiciones en que el país lo requiere en este momento.

Sr. Laurencena. — Pido la palabra.

Yo no pensaba hablar sobre este asunto, después de la exposición de mi compañero de representación por Entre Ríos, senador Eguiguren; pero se ha dicho que el rechazo de este proyecto significaría el desequilibrio del presupuesto, y que los que nos oponemos a su sanción no hemos presentado en su reemplazo nada orgánico.

Yo no hago en esta cuestión un asunto de orden constitucional, ni siquiera de orden autonómico de las provincias, porque he manifestado anteriormente, al hablar sobre el presupuesto general, que en mi concepto la absorción financiera de la Nación, que motiva los reclamos de las provincias, no se produce por un impuesto determinado, por tal o cual impuesto,

sino por el conjunto de los impuestos nacionales que exceden del límite que deben tener y que dejan un margen sumamente reducido a las provincias, y no me interesa saber en qué forma y por qué clases de impuestos se produce esa absorción.

Pero dije también en aquella exposición que el plan financiero del Poder Ejecutivo, el conjunto de proyectos, era inspirado en un propósito meramente administrativo y fiscal pero sin contemplar la situación económica del país. A este último punto, a la situación económica es a lo que atribuyo una importancia excepcional.

Yo creo, señor presidente, que esta masa enorme de impuestos proyectados por el Poder Ejecutivo y sancionados por la Cámara o a punto de sancionarse, van a pesar considerablemente sobre la economía nacional, a punto si no de arruinarla, por lo menos de debilitarla en forma muy acentuada, y que demorará muchos años en poder resurgir y fortalecerse. Es por eso que yo creo que es necesario llegar al mínimo de gastos, con un mínimo por consiguiente de impuestos.

Llego a tal punto en este pensamiento, que creo que, si para evitar la sanción de este impuesto, y la sanción del impuesto a los réditos, fuera indispensable suspender el pago de nuestras obligaciones en el exterior, es necesario hacerlo.

Yo creo — como dijo el señor senador de la Torre — que no hay desdoro en que un país que está tratando de reconstruir su situación económica y financiera, que hace grandes sacrificios, como representaría ya aceptar una masa de 150 millones de pesos de nuevos impuestos, que representa el veintitantos por ciento de sus rentas públicas, aumento repentino en un momento de grandes dificultades, no hay desdoro, digo, en que se presente a sus acreedores y les diga: señores, esperen que voy a arreglar mis asuntos internos, voy a reponer la economía nacional, y después voy a pagar a ustedes, con todos sus intereses, porque no necesito quitas sino una espera. Creo que a ese punto debía llegarse.

Yo tenía la esperanza de que, si por uno de esos accidentes que suelen ocurrir en los parlamentos, este impuesto fuera rechazado, el Poder Ejecutivo habría de traernos este programa de acción.

Es muy lindo, muy satisfactorio para nuestra vanidad, decir que la Argentina es el único país de Sud América que no ha suspendido el pago de sus deudas internacionales, y yo me

atrevería a decir que es uno de los poquísimos países del mundo que todavía hace frente a sus compromisos internacionales. Pero la satisfacción de esa vanidad, va a ser a costa de sacrificios enormes, y lo que es peor, no es imposible todavía, que después de exigir esos sacrificios, después de arrancar a nuestra población, no digo sus ganancias sino gran parte de sus propios capitales, para poder pagar al extranjero, dentro de 6 u 8 meses el gobierno tenga que decirnos que las rentas públicas no alcanzan y no podemos, a pesar de todo, pagar al extranjero. Y habremos consumado un sacrificio estéril, absolutamente estéril.

Es eso, señor presidente, lo que yo no podría llamar plan orgánico, pero que es el pensamiento que había en el fondo de este asunto. Arreglamos nuestra casa bien, pero no hagamos como de costumbre, que nos ponemos a arreglarla y la desarreglamos cada vez más. Y eso es lo que estamos haciendo con estos 250 ó 300 millones de pesos que lanzamos con ceguera, por no decir otra cosa, sobre el país que está languideciendo, que está debilitándose día a día, señor presidente.

Nada más.

Sr. Ministro de Hacienda. — Pido la palabra.

Voy a referirme, señor presidente, a las manifestaciones que acaba de hacer el señor senador por Entre Ríos.

Yo creo, señor presidente, que este impuesto es absolutamente necesario para mantener el equilibrio del presupuesto. En la exposición que hice ante el Honorable Senado días pasados, creo haber demostrado que es imposible hacer mayores economías. He depurado del presupuesto todas las partidas rígidas, y el señor senador por Entre Ríos me ha oído. He determinado que únicamente se pueden hacer economías sobre 300 millones de sueldos y sobre 75 millones de gastos.

El señor senador por Entre Ríos ha estado diariamente en la Comisión de Presupuesto y no me ha señalado nunca el punto donde pudieran hacerse economías reales y efectivas.

Sr. Laurencena. — Yo no podía señalarlas, porque no podía cometer la injusticia de señalar algunas reparticiones determinadas. Podría señalar diez, las que tengo estudiadas, pero no podría hacerlo con todas.

Sr. Ministro de Hacienda. — Es muy fácil tomar un lápiz y un papel y hacer cortes. Pero le pediría que concretara dónde son posibles esas economías.

Sr. Laurencena. — Tengo estudiadas muchas reparticiones y le podría probar que son mu-

chas en las que hay un exceso enorme de personal y de gastos. Pero ya lo dije en la Comisión una vez, y creo que el señor ministro lo recordará, a requerimiento de uno de los miembros que me preguntaba: qué reparticiones, le dije, no; no quiero poner una marca de fuego a una determinada repartición porque sé que no es una sola, yo sé que eso ocurre en casi todos los casos, con una o dos excepciones. Entonces, lo que yo deseo, porque no puedo hacer el estudio íntegro del presupuesto, es que el señor ministro ahonde en todas las reparticiones y en todas va a encontrar los excesos a que aludo. Sí, señor ministro: hay muchas reparticiones en esas condiciones y le voy a señalar una repartición entre muchas en que el año 28 tenía 72 empleados con un presupuesto de 290 mil pesos, y actualmente tiene 223 empleados y cuesta 880 mil pesos. Y como esa repartición, no es una, son montones, son casi todas, comparadas con el presupuesto del año 1927 ó 1928 en que ya eran rumbosas y exageradas.

Sr. Ministro de Hacienda. — Yo me he referido a los presupuestos anteriores y he dicho que desde el año 1929 a la fecha se van reduciendo los presupuestos. Tenemos el de 1929, el de 1930, que ha llegado a 1.043 millones, y los de 1931 y 1932 van completamente en descenso.

Sr. Laurencena. — Son cifras globales.

Sr. Ministro de Hacienda. — Pero diga el señor senador cuáles son esas reparticiones. Es extraño que no las haya dado.

Sr. Presidente. — Ruego al señor senador no interrumpir al señor ministro.

Sr. Ministro de Hacienda. — He dicho que las economías deben hacerse sobre 300 millones de sueldos y sobre 75 millones de gastos. Y entonces es imposible hacerlas sobre más de 75 millones de gastos cuando hay de por medio los grandes servicios indispensables de la Nación. Entonces fatalmente tendríamos que llegar a las cesantías en masa, lo que sería agravar el problema de la desocupación.

Ahora, respecto a la manifestación que hacía el señor senador por Entre Ríos hace un momento, en que invitaba al Poder Ejecutivo a que se suspendiese el servicio de la deuda, yo creo que eso no se puede sostener, porque si se suprime el pago de la deuda externa se afecta fundamentalmente el crédito del país.

Sr. Laurencena. — El crédito del país que no tenemos.

Sr. Ministro de Hacienda. — El día que esté muerto el crédito de la Nación, ya no ha-

brá remedio. Cuando haya una necesidad será entonces necesario ir francamente a la emisión.

Sr. Laurencena. — No, señor ministro.

Sr. Ministro de Hacienda. — Lo invito a que me señale otro camino.

Sr. Laurencena. — El día que no paguemos las deudas al extranjero, el extranjero nos va a ayudar.

Sr. Ministro de Hacienda. — Es una propuesta que significa afectar el crédito del país.

Sr. Laurencena. — Nos estamos sobrando, señor ministro. Si ahora podemos pagar a todo el mundo, es claro que nadie nos va a tender la mano. Al contrario, los acreedores se ponen más exigentes.

Sr. Ministro de Hacienda. — Me extraña esa manifestación por la que se invita al Poder Ejecutivo a cometer ese acto.

Sr. Presidente. — Ruego al señor ministro y al señor senador por Entre Ríos que no dialoguen.

Sr. Ministro de Hacienda. — El impuesto a los réditos es un impuesto absolutamente necesario.

Aprecio la manifestación de los señores senadores que, no obstante sus reparos, van a votar en favor del proyecto, porque así lo exige, hoy por hoy, el interés nacional. Les significo, desde luego, la complacencia del Poder Ejecutivo, porque de otro modo, si este impuesto no fuera votado sería afectar el equilibrio mismo del presupuesto, por lo menos en cincuenta millones de pesos.

Y he dicho, señor presidente, que la Nación no soporta un nuevo déficit, no podemos ir a un nuevo déficit y será necesario en consecuencia que los señores senadores, haciendo un sacrificio de sus convicciones, voten en favor de este proyecto.

En cuanto a las manifestaciones del señor senador por Salta que hace indicación para que se establezca este impuesto por un término limitado hasta el 31 de Diciembre de 1934, la acepto, en nombre del Poder Ejecutivo.

Nada más.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Sr. Rothe. — Pensaba votar en silencio, en sentido adverso el impuesto a la renta, pero me veo obligado a manifestar, si bien lo haré bien brevemente, la razón de mi voto. Los argumentos de orden jurídico y político que acaban de aducirse son ilevantables; si ha de subsistir en carácter exclusivo de la Nación, el impuesto a los réditos sería inconstitucional y agravaría una situación que pesa demasiado gravemente en la economía del país.

La posibilidad de que el voto adverso al impuesto a los réditos desequilibre el presupuesto no debe ser motivo para votar en sentido favorable una clase de impuesto que sufrirá en su aplicación los inconvenientes de la inconstitucionalidad.

La razón por la cual no ha podido modificarse el presupuesto en tantos años, no obstante haberse señalado los graves vicios de que adolece y haberse demostrado también de un modo elocuente, que es demasiado oneroso para la situación económica del país, está en que siempre se ha apelado a la razón de urgencia, a la necesidad de equilibrio, la suprema necesidad de terminar ese asunto siempre grave y siempre debatido con apremio.

Pero queda una esperanza de rectificación, una sola esperanza que es la de producir el desequilibrio en este momento para que el único procedimiento que permita sanear el presupuesto se ponga en práctica, para que el gobierno de la Nación empiece la tarea reconstructiva, la vuelta a la normalidad, el estudio de los servicios públicos, tal como son requeridos por las necesidades reales del país y de la economía que pueda en cada repartición establecerse, para que el servicio sea mejor hecho al menor costo.

Si votáramos hoy el impuesto a la renta tendríamos para el año que viene, en el caso que produjera los recursos que de él se esperan, tendríamos probablemente mayores recursos y mayor presupuesto, agravándose todas las dificultades que del punto de vista económico sufre el país.

En cambio, si no votamos este impuesto, el Poder Ejecutivo se apresurará a proponer nuevas medidas que permitan equilibrar el presupuesto, y evitar los inconvenientes que el impuesto a la renta tiene.

Puede ser que el Poder Ejecutivo salve esas dificultades, agravando la tasa del impuesto a la renta y haciéndola recaer sobre la renta realmente imponible y repartiéndola como correspondería entre las provincias y la Nación en la forma que propone el señor senador por Tucumán u otra semejante.

Pudiera el Poder Ejecutivo procurar otra clase de impositivos, o bien recurrir a la economía que en la organización de muchas reparticiones públicas deben efectuarse.

Estas son las razones de mi voto adverso.

Sr. Presidente. — Se va a votar.

Sr. Montenegro. — ¿Con el agregado propuesto por el señor senador por Salta?

Sr. Presidente. — Se va a votar en general.

Mayo 14 de 1932

CAMARA DE SENADORES

10ª Reunión. Cont. de la 4ª Sesión ord.

La Comisión ha aceptado la enmienda.

Sr. Bravo. — Pido votación nominal.

Sr. Presidente. — Se va a votar nominalmente.

—Votan por la afirmativa, los señores senadores: Serrey, Patrón Costas, Sánchez Sorondo, Santamarina, Castillo, Ceballos, Lubarry, Vidal, Montenegro, López Peña, Vera, Arenas, Arancibia Rodríguez, Rodríguez Saa, Galíndez y Campos.

—Por la negativa, los señores senadores: Palacios, Ceballos Reyes, Matienzo, Eguiguren, Laurencena, Bravo y Rothe.

Sr. Secretario (Figueroa). — Han votado 16 señores senadores por la afirmativa y 7 por la negativa.

Sr. Presidente. — Queda sancionado en general. Está en discusión en particular. Se va a leer el artículo 1º.

Sr. Secretario (Figueroa). — El artículo 1º, con las modificaciones aceptadas por la Comisión, queda redactado en la siguiente forma: «Modifícase el impuesto de emergencia a los réditos establecido por el Gobierno Provisional el 19 de Enero de 1932, en la siguiente forma: Artículo 1º — A partir del 1º de Enero de 1932 todos los réditos derivados de fuente argentina, a favor de argentinos o de extranjeros, residentes o no residentes en el territorio de la República, quedan sujetos al gravamen de emergencia nacional que establece la presente ley. El presente impuesto caducará el 31 de Diciembre de 1934.»

Sr. Matienzo. — Pido la palabra.

Reproduciendo los argumentos que dí hace un momento al tratarse en general, fundo ahora el agregado al artículo 1º, que pido a la Secretaría se sirva dar lectura.

Sr. Secretario (Figueroa). — (*Leyendo*): «A los efectos del artículo 4º de la Constitución, una vez terminada la recaudación de este impuesto, se liquidará lo que corresponda a cada provincia o territorio nacional y a la Capital Federal, en proporción a su número de habitantes, según el último censo nacional. La Nación devolverá a cada provincia la cantidad que ella hubiera recaudado de más, y le cobrará la cantidad que hubiese pagado de menos.»

Sr. Matienzo. — Ese párrafo vendría después del otro agregado que se ha hecho fijando término a la ley hasta el 1º de Enero de 1934.

Sr. Presidente. — Se va a votar el despa-

cho de la Comisión y después el agregado propuesto por el señor senador por Tucumán.

Sr. Eguiguren. — Quisiera que la Secretaría tuviera la gentileza de leer cómo ha quedado el despacho de la Comisión.

Sr. Secretario (Figueroa). — (*Leyendo*): «A partir del 1º de Enero de 1932, todos los réditos derivados de fuente argentina, a favor de argentinos o de extranjeros residentes o no residentes en el territorio de la República, quedan sujetos al gravamen de emergencia nacional que establece la presente ley.

«El presente impuesto caducará el 31 de Diciembre de 1934.»

Sr. Eguiguren. — Pero el artículo de la Cámara de Diputados establecía que una ley determinaría el 1º de Enero de 1934 cómo debería hacerse la repartición.

Varios señores senadores. — Está suprimida esa parte.

Sr. Eguiguren. — De manera que terminaba el impuesto en el año 1933...

Sr. Serrey. — Terminaba en el año 1934, pero se ha modificado.

Sr. Eguiguren. — El despacho de la Cámara de Diputados dice que si el 1º de Enero de 1934 no se dictase la ley, quedaba derogada. es decir, en Diciembre de 1933, y ahora, con la modificación, se alarga el plazo.

Sr. Arancibia Rodríguez. — Porque ya no se va a distribuir nada; se tiene un plazo definitivo de tres años. De esta manera encuadramos dentro de la Constitución sin los impedimentos que los señores senadores encontraban al artículo 67.

Sr. Eguiguren. — Estoy de acuerdo, pero me parece que debería ser en carácter transitorio hasta el año 1933.

Sr. Arancibia Rodríguez. — Eso sería acortar el plazo; ahora queda definitivamente reducido el plazo a tres años, después de los cuales no hay reparto.

Sr. Serrey. — Yo quisiera que el señor senador me explicara cómo saca su cuenta...

Sr. Arancibia Rodríguez. — Ya está aclarado.

Sr. Eguiguren. — Perfectamente.

Sr. Presidente. — Habiendo sido aclarado el punto, se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Se va a votar el agregado propuesto por el señor senador por Tucumán.

—Se vota y resulta negativa.

—Se lee:

Artículo 4º — Inciso b). Las ganancias que las sociedades cooperativas distribuyen a sus asociados de acuerdo con el artículo 2º, inciso 17 de la ley número 11.688, y las que se destinen a su fondo de previsión o reserva. Quedan excluidas de esta exención las ventas realizadas a los no socios y a los que siéndolo compran productos a las cooperativas para su reventa;

- e) Las indemnizaciones, participaciones y devoluciones de primas que paguen las compañías de seguros;
- f) Las indemnizaciones que en forma de capital o rentas se paguen por accidentes o por enfermedad de profesionales, por lesiones o incapacidad parcial o absoluta para el trabajo temporal o permanente y las que perciban los herederos a título de indemnización por la muerte de miembros de su familia.

—Sin observación, se vota y aprueba.

—Se leen los artículos 5º, 6º y 7º y se aprueban sin observación.

—Se lee:

Al artículo 9º del decreto del Poder Ejecutivo que pasa a ser 8º del proyecto, se le agrega al final: «Se procederá en las provincias en la misma forma respecto de los impuestos que gravan los inmuebles y en cuanto excedan del seis por mil».

Queda el artículo como sigue: El contribuyente de la Capital Federal y territorios nacionales podrá descontar en cualquier caso, del impuesto a su renta correspondiente a 1932, el importe de la contribución de dos por mil establecida con carácter adicional sobre el valor fiscal de la finca. Se procederá en las provincias en la misma forma respecto de los impuestos que gravan los inmuebles y en cuanto excedan del seis por mil.

—Se aprueba, sin observación.

Sr. Matienzo. — ¿Y el artículo 6º del proyecto de la comisión?

Sr. Presidente. — El artículo 6º ya ha sido aprobado, señor senador.

Sr. Matienzo. — Yo voy a hacer una pregunta, sin embargo, porque procedería una reconsideración.

Actualmente es muy frecuente que en las

casas de departamentos el propietario se reserve el departamento más alto y alquile el resto. ¿Cómo se le aplicará esta ley? ¿Cómo se liquidará este impuesto? Pregunto a la Comisión.

—Después de un momento de espera, dice el:

Sr. Matienzo. — ¿La comisión no lo sabe? Entonces quiere decir que hay que suprimirlo. *(Risas)*.

Sr. Ministro de Hacienda. — ¿Cómo dice, señor senador?

Sr. Matienzo. — Decía que cómo se va a liquidar el impuesto al dueño del departamento que se reserva el departamento más alto para vivir él.

Sr. Ministro de Hacienda. — Habita su inmueble o habita su departamento, y se le cobrará el impuesto que corresponda.

Sr. Matienzo. — Esto va a ser un semillero de pleitos.

Sr. Ministro de Hacienda. — No, señor senador.

Sr. Presidente. — Ese artículo ya ha sido aprobado, señor senador.

Sr. Matienzo. — Muy bien, no voy a pedir la reconsideración; si la Comisión no quiere reconsiderar, yo me someto.

—Se lee el artículo 9º.

Sr. Vera. — Pido la palabra.

Yo voy a pedir la supresión de este artículo, porque este es un impuesto que creo que no solamente es de difícil percepción, sino que va a producir un retraimiento de capitales.

Las personas que por cualquier circunstancia tengan necesidad de ausentarse del país, por razones de salud o simplemente porque desean conocer otros países, o residir en ellos transitoriamente, por razón de sus actividades, verían disminuidas sus rentas en una proporción que no beneficiaría mayormente al fisco.

Por otra parte, este impuesto, este recargo del 30 % a la renta de las personas radicadas en el extranjero, va a producir el alejamiento de muchos capitales.

Nuestro país es un país de inmigración. Los extranjeros que han venido a nuestro suelo, que han hecho aquí su fortuna, grande o pequeña, han venido bajo las garantías y las esperanzas que les ofrecen nuestras leyes.

Con esta disposición se obligaría a los que desean ir a dejar sus huesos, como se dice, en su terruño, a liquidar todos los bienes que po-

seen en la República para llevar allí sus capitales, substrayéndolos al comercio y a las necesidades de la República.

Muchos emplean parte de su capital o renta en títulos, títulos que no pueden negociar en las mismas condiciones en el extranjero, porque pagan fuertes impuestos y porque, además, les exigen allí un impuesto en sellos para poder cobrar sus rentas.

Quiere decir, que todos esos capitales que podían emplearse en títulos nacionales, en cédulas hipotecarias, por ejemplo, emigrarían del país, perjudicando al comercio y el desenvolvimiento de la riqueza nacional.

Por otra parte, no veo qué razón haya para que se sancione este gravamen sobre los extranjeros o sobre los nativos que viven fuera de la República, respecto de los que estamos viviendo aquí. Si nuestra Constitución ha sido tan liberal que autoriza a sus habitantes a fijar su residencia donde lo crean más conveniente sería un contrasentido que se venga a coartar esa libertad imponiéndole un mayor gravamen a los bienes que posee en la República, por el sólo hecho de salir de ella. ¿Qué vamos a ganar nosotros con este mayor gravamen al ausentismo? ¿Lo vamos a impedir? No vamos a impedir el ausentismo. El capital que ha venido a la República, que se ha radicado aquí, ya ha producido sus efectos, ha contribuido al engrandecimiento de la Nación, a la prosperidad del país, a la creación de las industrias. Es lógico, entonces, que esos hombres que nos han favorecido con el concurso de sus capitales y el esfuerzo de sus brazos, los coloquemos en una condición de poder ir a disfrutar ese esfuerzo de su trabajo donde quiera que fijen su residencia.

Es en virtud de esas ligeras consideraciones que voy a votar en contra de ese artículo.

Nada más.

Sr. Eguiguren. — Pido la palabra.

Lamento sinceramente la impugnación del señor senador por Mendoza, porque dentro de lo arcaico y anticientífico que tiene esta ley es lo único moderno, lo único bueno y justo que ella ofrece. Creo más, que dentro del izquierdismo de que se ha hecho gala — entendido el izquierdismo como síntoma de progreso — esta disposición era la única exteriorización práctica. Si se la quitamos al proyecto, en realidad lo dejamos en la condición escuálida que he anunciado antes.

Los peligros que el señor senador señala no existen, y se lo voy a probar con hechos. La provincia de Santa Fe tiene establecido el im-

puesto al ausentismo desde hace rato y le ha dado muy buenos resultados. No ha impedido la entrada de nuevos capitales, porque en realidad el monto del impuesto no constituye una traba para la aplicación de esos capitales y sabido es que éstos van a donde pueden obtener beneficios.

En Entre Ríos, dentro de un conjunto de normas avanzadas y progresistas, como el impuesto progresivo a la tierra, el impuesto a la tierra libre de mejoras, hemos establecido también el impuesto al ausentismo, y sin ningún inconveniente, sin ninguna restricción para los capitales extranjeros.

Es el impuesto más justo que se pueda dar. Observe el señor senador que el rentista que se va al extranjero, sea argentino o extranjero, se encuentra en una situación especial de fortuna, porque no se puede ir, como decía el señor senador, a descansar sus últimos días a otra parte si no se tiene la renta para asegurar esa situación creada.

Por otra parte, ese propietario paga al extranjero un conjunto de impuestos. En cambio, los propietarios que están dentro del país están soportando no solamente la contribución territorial, sino todos los otros impuestos, los impuestos internos, el impuesto al consumo, en fin, de distintas categorías, de manera que hay una situación de desigualdad respecto a las contribuciones para el sostenimiento del fisco nacional entre el propietario ausente y el propietario presente en el país. Este está contribuyendo con una mayor cantidad. En cambio, el otro, generalmente se encuentra en una situación también especialísima en el extranjero, paseando, disfrutando de sus rentas, mientras que el que está aquí está soportando las cargas, y realmente contraído al cumplimiento estricto de sus obligaciones.

Hay un principio de justicia social en sacar una pequeña parte al propietario ausente para colocarlo en la situación del propietario presente y, sobre todo, más conveniente en estos momentos en que a todos los habitantes del país les estamos reclamando un esfuerzo realmente extraordinario, que esos señores que están contribuyendo a sostener impuestos en el extranjero, también contribuyan patrióticamente a sostener ese pesado armazón administrativo.

Es el impuesto más simpático, el impuesto de un contenido social más justo y más moderno, y si le sacamos eso que le da cierto barniz a este proyecto, realmente le sacamos lo más esencial que tiene.

Vuelvo a repetirlo, la experiencia de varias provincias demuestra que en la práctica no han ofrecido esos inconvenientes. Hay casos, como en Santa Fe, de una señora propietaria que reside en Francia, que tiene un latifundio enorme. No la quería citar pero el señor ministro de relaciones exteriores la ha nombrado en voz baja, y, en fin, yo guardo el secreto. Decía que tiene un latifundio enorme y que está disfrutando de sus cuantiosas rentas. En la provincia de Entre Ríos, sucede también, más o menos lo mismo. Recuerdo de un propietario que tiene alrededor de seis mil hectáreas de tierra en las costas del Uruguay y que ni las conoce ni se ha molestado en venir a conocerlas, pero que en cambio está sacándoles el fruto del trabajo del esfuerzo colectivo de todos los habitantes del país. Es bueno, señor presidente, que esos caballeros también contribuyan al sostenimiento de nuestro organismo administrativo.

Estas son las razones por las cuales pediría al señor senador por Mendoza que retirara su impugnación.

Sr. Vera. — Pido la palabra.

Yo quería hacer esta manifestación. Cuando he propuesto la supresión de este artículo no he tenido en cuenta las grandes fortunas ni los potentados que viven en el extranjero; me había referido única y exclusivamente al pequeño propietario, al hombre de trabajo, al que vive y se contenta con poco y se va a vivir al extranjero; a la pequeña fortuna, a ese pequeño propietario que tiene muy escasas rentas y que con este impuesto las podría disminuir. De manera, que por lo menos podría hacerse entonces un distinguo y establecerse una escala progresiva, o exonerar de estos impuestos a las propiedades que tengan una renta mínima o un valor escaso, es decir, sin dañar al bracero que ha venido al país que ha trabajado durante un tiempo, se conforma con haber formado un pequeño capital, y se va a vivir a su tierra, donde tal vez la vida es más barata.

Aun tal vez entraría dentro de este concepto ese pequeña renta, ese pequeño socorro que ellos envían a su familia. Gravar eso, yo creo que produciría un retraimiento en la inmigración que la necesitamos. Es debido a la inmigración que nosotros hemos progresado y estamos progresando.

Esa es la idea de fondo que me ha animado a proponer esta supresión.

Sr. Eguiguren. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — La había pedido antes el miembro informante de la Comisión.

Sr. Vidal. — Las palabras del señor senador por Entre Ríos me ahorran las que yo tendría que pronunciar a este respecto. De manera que no necesitaré agregar muchas más sino solamente manifestar que esa carga es relativamente insignificante; un 30 por ciento sobre el impuesto a la tasa que hay que pagar, viene a representar el 7 y fracción por ciento, de manera que no es un recargo exagerado que pueda producir los efectos de ahuyentar los capitales.

En cuanto a la excepción de los réditos está establecida en la ley, lo mismo que la progresividad del impuesto, de manera que están previstos los casos a que se refiere el señor senador.

Sr. Palacios. — Pido la palabra.

En la sesión anterior al tratarse el presupuesto, expresé que me ocuparía hoy en general de las leyes impositivas. Desde luego; he renunciado a tal propósito, porque frente a las exigencias del país, sería indiscreto pronunciar, ahora, largos discursos. Pero debido a la oposición del señor senador a uno de los pocos artículos que se puede votar, a mi juicio, en este proyecto, me veo obligado a intervenir en el debate para decir que el único inconveniente de este gravamen al ausentismo es su exagerada modestia.

Yo hubiera votado un impuesto más elevado. El impuesto al ausentismo es ya una medida tímida ante el derecho positivo, de esta hora. La reforma agraria operada en Europa después de la guerra ha sentado en nombre de un nacionalismo o de un regionalismo económico un principio mucho más audaz: que no puede ser propietario de tierra quien no resida en el país. En algunas partes se ha decretado la expropiación de toda tierra de los ausentes.

Y esa expropiación se ha hecho, sin indemnización o bien pagando la indemnización con una enorme retasa sobre el valor venal fijado, y en títulos de renta de 45 a 60 años en forma tal que su amortización se hace con un cuarto o sexto de la renta de la tierra expropiada. El impuesto al ausentismo es lo menos que se puede hacer y no es una improvisación. En primer lugar está sancionado en la república hermana del Uruguay, y aquí, dos grandes financistas de distintas tendencias, lo han auspiciado, el doctor Eleodoro Lobos y el doctor Juan B. Justo.

El doctor Lobos, siendo decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, se dirigió al rector indicándole que propiciará este gravamen, para el sos-

Mayo 14 de 1932

CAMARA DE SENADORES

10ª Reunión. Cont. de la 4ª Sesión ord.

tenimiento de las universidades argentinas, y el doctor Justo se refirió a él en magistrales exposiciones.

Debemos votar este impuesto.

Por lo que se refiere a las manifestaciones del señor senador por Mendoza, conviene expresar que se trata de un impuesto que gravará el patrimonio de los propietarios de bienes inmuebles que residen fuera del país. No se trata de los inmigrantes... sino de los ricos que van a Europa a gozar de sus rentas.

Sr. Vera. — Retiro mi indicación, señor presidente. Yo tenía entendido que este era un gravamen para los pobres; pero apercibiéndome que es para los ricos, retiro mi indicación.

Sr. Palacios. — Termino, entonces, diciendo se trata de los ricos que se van a Europa y que frecuentemente desconocen su país, lo que es funesto.

Recuerdo siempre que un rico propietario de grandes estancias en la mejor provincia de la República, trajo de Europa para su jardín, habiéndola pagado en muchos miles de francos, una planta con su denominación científica de *cinerarium argentada*. La consideró de lujo y la cuidaba con cariño, hasta que un día un gaucho de su estancia, le demostró que esa planta no era sino la modesta y vulgar cortadera de los campos argentinos...

Sr. Presidente. — Habiendo retirado la modificación que propuso el señor senador por Mendoza, queda sancionado el artículo.

Sr. Castillo. — Pido la palabra.

Voy a proponer un agregado a este mismo artículo, en el sentido de que el 30 por ciento de recargo comprenda también a los jubilados, pensionistas y retirados que obtasen por fijar su residencia en Europa.

Sr. Presidente. — ¿Como artículo nuevo?

Sr. Castillo. — Como un agregado al artículo 9º, que podría quedar así: «Pagarán también el recargo del 30 por ciento, los jubilados, retirados y pensionistas que optasen por domiciliarse en el extranjero».

Sr. Presidente. — ¿Acepta la Comisión?

Sr. Sánchez Sorondo. — La Comisión acepta.

Sr. Laurencena. — ¿No correspondería proponer ese agregado al votarse la otra parte que legisla sobre sueldos, jubilaciones y salarios? Ahora estamos tratando el impuesto territorial.

Sr. Castillo. — Es un recargo de impuesto por vivir en el extranjero.

Sr. Laurencena. — Como estamos votando ahora la parte de la ley sobre renta de la tierra, no es oportuno que establezcamos un im-

puesto sobre jubilaciones, pensiones y retiros a los que viven en el extranjero. Para la mejor ordenación de la ley, este agregado, si prospera, debe incluirse en la parte que legisla los sueldos y salarios.

Sr. Presidente. — ¿Acepta el señor senador por Catamarca la postergación del agregado para la oportunidad que indica el señor senador por Entre Ríos?

Sr. Castillo. — Sí, señor presidente.

—Se lee el artículo 10.

Sr. Presidente. — Se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sin observación, se leen y aprueban los artículos 11 a 15 (inclusive).

—Se lee:

Sueldos, salarios, pensiones, jubilaciones y dietas

Art. 16. — Las personas, comerciantes o entidades comerciales o civiles, públicas o privadas, que pagasen a sus empleados, obreros, pensionistas o jubilados, sueldos, salarios, pensiones, jubilaciones, dietas o cualquier otra remuneración de servicios personales, excluidos los descuentos para jubilaciones, quedan obligados a deducir por cuenta del contribuyente el impuesto del artículo anterior, al efectuar el pago de dichas remuneraciones.

Sr. Presidente. — Está en discusión.

Esta sería la oportunidad del agregado propuesto por el señor senador por Catamarca.

Sr. Castillo. — Sí, señor presidente, en la forma en que se ha redactado: «Pagarán también el recargo del 30 %».

Sr. Matienzo. — ¿Esto irá como agregado al artículo 16?

Sr. Presidente. — Sí, señor senador.

—Sin otra observación, se vota y aprueba.

—Se lee el artículo 17.

Sr. Matienzo. — Yo había observado este artículo, y hay otros senadores que también están en contra. Este es el artículo en contra de los médicos y abogados pobres, porque se establece un impuesto muy superior a la renta que pueden ganar en un año, que se supone que la ganan en un mes.

Sr. Eguiguren. — Yo haría otra pregunta al señor miembro informante de la Comisión. Cuando dice: «A los fines del artículo 15 se presume que el rédito de los contribuyentes que ejercen una profesión u oficio», etcétera, ¿qué alcance tiene la palabra oficio? Por ejemplo, un carpintero un herrero, está comprendido en esta denominación?

Sr. Sánchez Sorondo. — La Comisión no le dá más alcance que la que le da el diccionario.

Sr. Eguiguren. — Permítame, señor senador. Muchas veces los términos no son bien empleados, y el señor senador, que es un eximio abogado, lo sabe perfectamente que hay que buscar el sentido, el espíritu de la ley, el espíritu que guía al legislador a utilizar ese vocablo, que muchas veces no coincide con el que le da el diccionario o con el usual. Por eso me interesaba precisamente, por la interpretación ulterior que se le podía dar a este artículo.

Sr. Sánchez Sorondo. — Nosotros entendemos, señor senador, por oficio, la interpretación que el señor senador acaba de manifestar.

Sr. Eguiguren. — Me parece que interpretando así el artículo es excesivo: que un carpintero, un herrero que tengan un pequeño taller...

Sr. Sánchez Sorondo. — Pero hasta los peones pagan.

Sr. Eguiguren. — En la forma como se aplica, puede ser realmente excesivo y yo creo que no se perdería gran cosa con suprimir esa palabra.

Sr. Matienzo. — Francamente, yo opino que los médicos nuevos ganan menos que un carpintero o un herrero.

Sr. Patrón Costas. — La Comisión mantiene el artículo.

Sr. Presidente. — Se va a votar el despacho de la Comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se leen y aprueban, sin observación, los artículos 18 a 21b (nuevo) inclusive.

—Se lee el artículo 22a (nuevo).

Sr. Serrey. — Considero que este artículo en la forma en que está redactado envuelve una verdadera injusticia. Se trata de dos reducciones: la del diez por ciento a los contribuyentes casados, por el hecho de serlo, y la del 5 % por cada persona a su cargo con obligación de alimentarla. Comprendo que la primera parte del artículo se refiere a los casados como una manera de favorecer el establecimiento del

hogar, pero no encuentro razón para que no se exonere en igual cantidad a los viudos que tengan hijos de menor edad.

Sr. Presidente. — ¿La Comisión acepta?

Sr. Serrey. — Permítame, señor presidente, no he terminado.

Sr. Presidente. — Creí que el señor senador había terminado.

Sr. Serrey. — La modificación que propongo es la siguiente:

La segunda parte, que se refiere a la reducción del 5 %, comprende al que tenga a su cargo personas, sea casado, viudo o soltero. Supongamos una persona que sostiene a su padre incapacitado o a sus hermanas, y hay casos de gente que por encontrarse en esas condiciones no pueden formar hogar porque no les alcanza su renta, y hay el caso del padre natural.

Sr. Sánchez Sorondo. — Está incluido en el artículo.

Sr. Serrey. — No está incluido en el artículo.

Yo propondría lo siguiente: Los contribuyentes casados y con hijos a su cargo, tienen derecho a una reducción del 10 por ciento en su renta, imponible por categoría. Todo contribuyente tendrá derecho a una rebaja de un 5 % por cada hijo a su cargo que careciendo de réditos propios, sea menor de veinte años o esté físicamente incapacitado para el trabajo, o ascendiente, sin rentas o incapacitado, que esté a su cuidado. Es decir, que la segunda parte comprende a todo contribuyente.

Sr. Sánchez Sorondo. — La Comisión acepta, porque ese es el espíritu y hasta me animaría a decir la letra. No tiene la Comisión ningún inconveniente en aceptar la aclaración que propone el señor senador.

Sr. Presidente. — ¿Quiere tener la bondad de dictar el agregado, señor senador?

Sr. Serrey. — Los contribuyentes casados o viudos, con hijos a su cargo, tienen derecho a la reducción de un 10 % de su renta imponible por categoría. Todo contribuyente tiene, además, derecho a una reducción del 5 %... Lo demás sigue como está en el artículo.

Sr. Presidente. — Si no se observa, se dará por aprobado con la modificación propuesta por el señor senador por Salta.

—Aprobado.

—Se leen los artículos 28 y 33 y se aprueban sin observación.

Mayo 14 de 1932

CAMARA DE SENADORES

10ª Reunión. Cont. de la 4ª Sesión ord.

—Se lee:

En el artículo 34 del decreto del Poder Ejecutivo se substituye «10» por «5».

Queda el artículo como sigue: La acción para imponer multas y la acción para hacerlas cumplir una vez impuesta, se prescribe a los cinco años.

Sr. Presidente. — En discusión.

—Aprobado.

—Se leen los artículos 35, 37a (nuevo) y 37b (nuevo) y se aprueban sin observación.

Sr. Secretario (Figueroa). — El siguiente es de forma.

Sr. Presidente. — Ha quedado terminada la consideración del impuesto a los réditos.

Sr. Serrey. — Propongo un cuarto intermedio, hasta el lunes.

—Apoyado.

Sr. Presidente. — Quedaría por considerar el impuesto a las transacciones, cuyo miembro informante se encuentra enfermo.

Sr. Sánchez Sorondo. — Es por esa razón que me permito apoyar la moción para que pasemos a cuarto intermedio hasta el lunes, esperando la presencia del señor miembro informante de la Comisión.

Sr. Presidente. — Entiendo que la Presidencia está autorizada para comunicar los proyectos sancionados a la Cámara de Diputados.

Varios señores senadores. — Así es.

Sr. Presidente. — Invito al Honorable Senador a pasar a cuarto intermedio hasta el lunes.

—Así se hace, siendo la hora 22 y 5 minutos.

RAMÓN COLUMBA,
Director de Taquígrafos.